Revista Nica. de CC.SS.
ANICC-SS.
Nº 1 - Septiembre 86

análisis de coyuntura

El estado actual de la guerra y sus perspectivas

Joaquín Villalobos
Miembro de la comandancia del FMLN

Tomado de *Revista de Estudios Centroamericanos* –ECA–
No. 449, marzo de 1986, página 169-204
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", San Salvador, El Salvador

El desarrollo del movimiento revolucionario.

En el transcurso de las últimas décadas, el movimiento revolucionario salvadoreño ha logrado mantener un proceso ininterrumpido y ascendente de acumulación de fuerzas, el cual desemboca en el actual proceso de guerra popular. En este marco, los últimos cinco años constituyen una fase avanzada de la guerra popular dentro de la cual el movimiento revolucionario se ha mantenido en ofensiva continua.

A manera de síntesis podemos señalar que el proceso de acumulación de fuerzas del movimiento revolucionario salvadoreño se expresa claramente en los siguientes aspectos:

a. alto grado de organización y conciencia de las fuerzas motrices de la revolución;

b. avanzado proceso de unificación de las fuerzas revolucionarias, y

c. gran desarrollo militar de las fuerzas revolucionarias hasta el punto de encontrarse la guerra popular en una fase muy avanzada.

Si bien, por un lado, el factor unidad de la vanguardia es evidente y está implícito en el avance de los otros aspectos, podemos señalar, por otro lado, que lo fundamental para analizar el proceso de acumulación, es el problema de las fuerzas motrices y el desarrollo de la guerra popular.

En esta primera parte del trabajo analizaremos lo relativo al problema de las fuerzas motrices, por ser el factor histórico estructural más importante y en el cual descansa la perspectiva general del avance de la revolución.

Si nos remitimos al análisis histórico de los niveles de organización y desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores en nuestro país, a partir de la década del 60, veremos que, muy a pesar de los elevados grados de represión aplicados por las dictaduras militares, se ha mantenido un proceso de acumulación de fuerza. Este proceso se expresa en el hecho de que las clases trabajadoras, a lo largo de 20 años, han desarrollado un alto grado de organización abarcando prácticamente todos los sectores populares. A mediados de la década del 60, el desarrollo organizativo de las clases populares cubría solamente algunos sectores de la clase obrera y del estudiantado universitario. Las luchas electorales que en este período jugaron un papel decisivo en el desarrollo de la conciencia política de las masas populares, influenciaron a las capas medias y motivaron al pueblo para desarrollar nuevos niveles de organización, fundamentalmente en los centros urbanos. En este momento, el nivel de organización de los obreros agrícolas y de los campesinos pobres era inexistente, pues aún pesaba sobre ellos la huella represiva de 1932.

A finales de la década del 60 se produjeron nuevos avances al desarrollarse la organización magisterial y la de los estudiantes de secundaria con lo cual la organización de los sectores populares se extendió más allá de las ciudades principales y alcanzó a un sector importante del propio aparato del Estado.

A principios de los años 70, a pesar de lo inmencionable que resultaba el término "sindicaliza-

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

ción campesina", comenzaron a darse los primeros niveles de organización de los trabajadores del campo. A mitad de la década del 70, esta organización asumió características formales y órganicas, cubriendo una buena parte del territorio.

En 1978, 1979 y 1980, con legalidad o sin ella y en la mayoría de los casos bajo formas de hecho, el nivel de organización de los sectores populares abarcó a la mayor parte de la clase obrera, a los campesinos, estudiantes, pequeños comerciantes y a algunos sectores del aparato del Estado, incluyendo áreas tan estratégicas como la industria generadora de energía eléctrica. Todo este desarrollo organizativo se expresó con fuerza en el momento más álgido de las luchas populares de los años 1979 y 1980.

Los diversos grados de represión con los que se intentó destruir todo este poder organizativo de las clases trabajadoras, cobraron las características de un genocidio con más de 50 mil muertos; varios centenares de miles de desplazados y exiliados; centenares de presos y miles de desaparecidos. Este proceso de lucha de los años 1979 y 1980, estuvo íntimamente ligado al desarrollo de la guerra popular, lo cual significó objetivamente, un nivel superior en el desarrollo de la conciencia política del movimiento popular.

En los años anteriores, las luchas electorales expresaron determinados niveles en la conciencia de los trabajadores en la lucha por una plataforma política, pero induscutiblemente, en el auge y empuje del movimiento popular en 1979 y 1980 y su vinculación al proceso de guerra popular, en el cual la lucha armada se definía claramente como la forma de la lucha fundamental, constituyó objetivamente una etapa superior en la conciencia política del pueblo.

Planteado todo lo anterior, surge una de las interrogantes claves para determinar las posibilidades históricas del movimiento revolucionario para mantener y definir el actual proceso de guerra a su favor. La interrogante es, ¿fue la represión, desencadenada en ese período de lucha popular, capaz de desarticular y aniquilar la base social del movimiento revolucionario y contener los niveles de organización y conciencia de clase de los trabajadores?.

Para respondernos a esta interrogante veamos la situación de manera más detenida. Aparentemente se produjo una disminución en la lucha popular como resultado de la represión, pero al mismo tiempo, hubo una generalización de la lucha armada, provocando el avance de la guerra revolucionaria. Esto permite precisar que, en realidad, no hubo repliegue de la lucha de masas, sino un avance de ésta a formas superiores, resultado del enfrentamiento entre el proyecto de genocidio y reformismo de los norteamericanos con las aspiraciones revolucionarias del pueblo.

La radicalización de la lucha provocó que amplios contingentes de las clases trabajadoras tomaran las armas. Es decir, que entre el auge de la lucha popular en 1979 y 1980 y el avance de la guerra revolucionaria en los años subsiguientes estaba de por medio el proceso de integración de amplios sectores del pueblo a la lucha armada y ésto, sin lugar a dudas, constituyó un salto de calidad, clave para mantener vigente la situación revolucionaria y el proceso de acumulación de fuerza.

De todo lo anterior se puede concluir que el aparente repliegue de lucha popular constituyó un avance hacia formas superiores de organización y conciencia de las masas y que en el terreno concreto de las estructuras gremiales, sectoriales y reivindicativas, ésto se terminó traduciendo también en una etapa superior con nuevas conquistas y mayores niveles de organización y conciencia de los trabajadores.

El nivel de desarrollo del movimiento revolucionario, la dimensión de las estructuras organizativas y los niveles de conciencia de las clases populares alcanzados en 1979 y 1980, asociados con la capacidad para profundizar y avanzar militarmente en la guerra popular en los años posteriores, volvieron imposible consumar la desarticulación total de las capacidades organizativas del pueblo. No se produjo lo que se podría llamar un corte histórico, como el que se dió en 1932. Las cosas fueron totalmente diferentes. La situación revolucionaria se mantuvo vigente. La primera crisis nacional de la situación revolucionaria no condujo a la toma del poder pero constituyó un avance en la acumulación de fuerzas que preparó al movimiento revolucionario para una lucha que ha resultado más compleja, dados los niveles de intervención.

El plan contrainsurgente que debieron instrumentar los norteamericanos, no pudo ser de las mismas características al aplicado en 1932, con una evidente dictadura militar. Ahora el plan contrainsurgente constituyó un genocidio encubierto, con un supuesto proceso de democratización que, además de la política de aniquilamiento de las bases de la revolución, buscaba maniobrar para atenuar el proceso de lucha social, disputar bases y frenar el desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas. De esto se concluye lo que ya muchos han reiterado: es el temor al avance y acumulación de fuerzas del FMLN lo que obligó al gobierno de Reagan a colocar un gobierno de apariencia reformista y democrática en El Salvador.

En el marco del avance de la guerra popular y de los otros factores que hemos señalado, la realidad objetiva nos muestra que, a pesar de los 50 mil muertos y de toda la represión, el campesinado, el cual había construido instrumentos organizativos ilegales, arribó a un momento superior de su organización con el surgimiento del movimiento cooperativo y las organizaciones campesinas con personería jurídica. Los trabajadores del Estado, quienes desarrollaron incipientes luchas en la coyuntura anterior, legitimaron y fortalecieron sus niveles de organización, muy a pesar de que las leyes prohibían su orga-

nización y su movilización. Igual cosa podemos decir de los trabajadores bancarios, quienes antes pasaban serias dificultades para organizarse.

Si echamos un vistazo a la cantidad de instrumentos organizativos y sectores organizados de la clase trabajadora en este momento, nos daremos cuenta de que estamos en una etapa superior a la de los años de 1979 y 1980 y que, lejos de haber un retroceso, se ha producido un avance, aún cuando los niveles de movilización no se pueden comparar todavía con los que se produjeron en aquellos años. Era acertado prever que a partir de la existencia de un mayor nivel de organización, del efecto generado por el avance de la guerra popular en la conciencia política de las masas y de la profundidad de la crisis económica que obligó al pueblo a movilizarse, resultaría una coyuntura de lucha social de dimensiones superiores a la de los años anteriores.

Estamos, sin lugar a dudas, en el momento histórico de mayor organización de las fuerzas motrices de la revolución, el cual cubre a la clase obrera, al campesinado, a los estudiantes, a los maestros, a los empleados y a los trabajadores del Estado, la banca, el comercio, los pequeños empresarios y comerciantes y los cooperativistas. Existe diversidad de organizaciones comunales vinculadas a la lucha por mejorar los niveles de vida, organizaciones por el respeto de los derechos humanos, organización de los presos políticos, de los pobladores de las zonas conflictivas, de los desplazados, organizaciones cristianas, etc.

El nivel de organización alcanzado por los sectores populares, es prueba del desarrollo de su conciencia política. Si esto lo vemos en el marco de una intensa y profunda guerra revolucionaria y con una objetiva crisis económica que golpea a las masas populares, podemos prever de manera realista y seria que la conducta de las diferentes fuerzas sociales del pueblo en los próximos años de guerra será de alineamiento con el movimiento revolucionario.

Partiendo de todo lo anterior y tomando en cuenta que la guerra revolucionaria es una profundización de la lucha social, resulta indiscutible que el movimiento revolucionario ha logrado mantener un proceso de acumulación de fuerzas no interrumpido ni cortado por la represión. El desarrollo organizativo y político de las fuerzas motrices de la revolución no pudo ser contenido. Además, el plan contrainsurgente que encabeza Duarte, no cuenta con ninguna posibilidad para maniobrar y disputar la base social al movimiento revolucionario, ya que el proyecto reformista y modernizante del sistema capitalista oligárquico, que tratan de impulsar los norteamericanos a través de Duarte, está, después de 5 años de guerra, en la bancarrota económica, política y social, muy a pesar de la creciente intervención del gobierno norteamericano.

La guerra: cinco años de ofensiva continua del FMLN

Intentando hacer una síntesis histórica de los 5 años de guerra podemos, al analizar su desarrollo, establecer algunas tesis básicas que nos permitan definir su curso.

En una primera etapa, ubicada en los años 1979, 1980 y 1981, el desarrollo militar del movimiento revolucionario fue exiguo y podemos decir que diferentes factores imposibilitaban la maduración de las condiciones históricas que permitieran su progresión hacia la toma del poder. Entre estos factores podemos citar los siguientes: En primer lugar, la falta de unificación de línea estratégica dentro del movimiento revolucionario. Esto impedía el máximo aprovechamiento del poder político y militar acumulado. El papel del factor militar era relativo en una coyuntura como la de ese período, aún cuando existía menor desarrollo, dado que estaba super potenciado el auge de masas. En segundo lugar, el nivel de intervención desarrollado por el gobierno norteamericano constituyó un factor externo que comenzó a alterar la correlación y, por consiguiente, la guerra cambió su carácter. Este fue el factor más decisivo de todos.

Dada esta situación, el primer plan contrainsurgente, o una primera etapa del mismo, diseñado por los norteamericanos, se orientó, no a la derrota militar del FMLN, sino al intento de destruir la base social de la revolución y al aniquilamiento y desarticulación de sus aliados potenciales. El FMLN no era considerado un peligro militar. Por lo tanto, el planteamiento central del plan norteamericano en esa etapa es lo que podríamos llamar el "genocidio necesario". La decisión política de consumar un genocidio y de llevar la represión a niveles tan brutales y elevados, partió de la evaluación de que en ese momento el FMLN no tenía la fuerza suficiente para hacer de la represión un factor detonante, sino que, por el contrario, la matanza podría dejar al pez sin el agua. En este planteamiento, como veremos más adelante, hay un grave error de subvaloración de la capacidad del FMLN para mantener el proceso de acumulación de fuerzas.

En el caso de El Salvador, los norteamericanos, al definir el plan contrainsurgente, tuvieron en cuenta todas sus experiencias anteriores, fundamentalmente Vietnam y Nicaragua. En ese sentido, es importante señalar que ya no eran aplicables los esquemas clásicos de gobiernos claramente dictatoriales con los cuales habían resuelto muchas crisis en América Latina en las décadas anteriores.

El triunfo de la revolución nicaragüense fue asociado por los norteamericanos al error de haber sostenido por demasiado tiempo su apoyo a dictaduras que, a la larga, aceleraron los procesos de acumulación de fuerzas de los movimientos revolucionarios. Esto explica por qué el gobierno de Reagan, que

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

suscribe la política del grupo de Santa Fe, debió variar mucho su posición al tolerar o favorecer cambios en el continente para evitar que los movimientos revolucionarios acumularan fuerzas como resultado del desgaste de las dictaduras.

Es decir, esta política del gobierno de Reagan, no obedece en nada a un deseo de cambios, sino esencialmente a un pensamiento contrainsurgente, reaccionario y anti-comunista que se está batiendo en retirada, pero tratando de complicar o retardar las revoluciones que de manera inevitable se van a producir en el continente.

El triunfo de la revolución popular sandinista provocó un giro muy grande en la política contrainsurgente norteamericana al incidir en la búsqueda de formas para el recambio de Pinochet en Chile, la caída de Duvalier en Haití, las presiones para la sustitución de Ferdinand Marcos en Filipinas y debemos esperar igual conducta con Paraguay. Aunque lo que determinará el momento de tomar estas decisiones, será el grado de acumulación de fuerzas de los movimientos revolucionarios y la presión popular.

En el contexto de esta política debemos analizar la supuesta democratización de El Salvador y el papel de Duarte y de la democracia cristiana. En primer lugar, es necesario que tengamos bien claro que el genocidio aparece como una fría decisión estructuralmente necesaria para los norteamericanos, sin la cual no era posible "pacificar" ni "democratizar". El problema era cómo ejecutar ese genocidio sin correr los riesgos de la ampliación de las fuerzas sociales de la revolución, del aislamiento internacional y de problemas internos en Estados Unidos. Si los norteamericanos hubieran optado por una dictadura de corte militar para ejecutar la matanza, habrían enfrentado serios problemas. Entre ellos, la posibilidad de una victoria revolucionaria a más corto plazo. En este sentido, es falsa la afirmación de que Duarte y la democracia cristiana constituyeron un mal menor. Los hechos muestran todo lo contrario.

Analicemos ésto en sentido histórico e hipotético. Supuestamente, el general Carlos Humberto Romero arribó al poder con la idea de cortar cabezas y de pacificar el país mediante una brutal represión. Sin embargo, no pudo consumar el genocidio, ni reducir las fuerzas sociales revolucionarias. Por el contrario, potenció su crecimiento y provocó una confluencia de fuerzas que abarcó al propio ejército, el cual terminó derrocándolo en octubre de 1979.

El golpe del 15 de Octubre de 1979 se inscribió en el intento de los norteamericanos de contener el avance revolucionario, pero en un momento en que múltiples fuerzas ajenas a su control estaban conspirando y buscando una alternativa popular. Las fuerzas democráticas y revolucionarias lograron incidir con fuerza en la coyuntura de golpe de Estado, frustrando el intento norteamericano de capitalizar la situación. Los 3 meses subsiguientes al 15 de octubre se convirtieron en un claro enfrentamiento entre el proyecto de genocidio y reforma de los norteamericanos y el proyecto democrático revolucionario sustentado por la mayoría del pueblo. Esta situación aceleró el proceso de acumulación de fuerzas por parte del movimiento revolucionario, ampliando las bases de la revolución y creando una confluencia de fuerzas la cual permitió constituir el FDR. Los norteamericanos intentaron contener el avance de las fuerzas democráticas y revolucionarias con el pacto democracia cristiana-ejército, en enero de 1980. Este pacto, que se ajustaba claramente a las necesidades del plan contrainsurgente norteamericano, tenía como elemento central el "genocidio necesario".

El hecho de que las fuerzas que conformaron la primera junta se desprendieron del gobierno y el que Monseñor Romero ya había condenado al ejército por el genocidio y que, a pesar de eso, la democracia cristiana pactara con García, entonces ministro de defensa, constituyen evidencias claras de que Duarte y la democracia cristiana, plegándose a los intereses del gobierno de Reagan, asumieran la ejecución del "genocidio necesario" conscientemente, con el objetivo de evitar el avance revolucionario desde una posición esencialmente reaccionaria, anticomunista y contrarrevolucionaria.

Hipotéticamente, es conveniente hacerse la siguiente pregunta: ¿qué habría pasado si en vez de la alianza democracia cristiana-ejército se hubiese establecido un gobierno con D'Aubuisson a la cabeza? Con toda seguridad, un gobierno de D'Aubuisson u otro similar de la derecha tradicional habría sido derrotado en el mero intento de consumar la matanza. El aislamiento interno e internacional no le habría permitido ni profundizar la matanza, ni mantenerse en el poder y se hubiera hecho muy difícil el apoyo norteamericano al ejército. Todo ésto hubiera dado condiciones al movimiento revolucionario para definir la situación a su favor. Esto nos lleva a concluir que, sin lugar a dudas, D'Aubuisson habría matado menos salvadoreños que los que ha matado y está matando Duarte. Estas razones explican por qué la cuota social del gobierno duartista es la más alta de toda la historia. El papel de la democracia cristiana ha sido el de proveer la fachada y la correlación favorable a una política contrarrevolucionaria, anti-comunista, reaccionaria, entreguista y anti-nacional. De ahí que resulte falso, en el contexto histórico salvadoreño, pretender ubicar a Duarte como un democratizador.

Los norteamericanos intentaron, sin éxito, que Duarte jugara un papel contrarrevolucionario similar al de Martínez en 1932. Duarte se prestó a lo que exigía el nuevo pensamiento contrainsurgente de los norteamericanos, el cual necesitaba que la democracia cristiana y Duarte se constituyeran en la nueva derecha que permitiera retardar la revolución.

Al analizar moral y políticamente el papel de

Duarte y de la democracia cristiana sería absurdo y poco serio regirnos por las expresiones de su juego político y dejar de lado la profunda lucha social y los enormes costos humanos que ésto ha tenido durante todo su período de gobierno. Es precisamente ese juego de poder relativizado de fuerzas no controladas y de desequilibrio de correlación dentro del poder mismo, lo que permite que el genocidio, como acción central del plan contrainsurgente de los norteamericanos, pueda consumarse reduciendo temporalmente el costo político para el ejército y el gobierno de Reagan.

Las bases del pacto democracia cristiana-ejército dejaban clara la libertad de acción del ejército en la ejecución de las matanzas y los asesinatos. A partir de ahí debemos entender que crímenes como el de Monseñor Romero estaban justificados por la política de pacificación del plan contrainsurgente y aparecían registrados en el esquema norteamericano como "crímenes necesarios". No interesaba mucho a quién le sería asignado el papel de ejecutor directo. El mismo sentido tienen los asesinatos de los dirigentes del FDR, de las monjas norteamericanas, del coronel Benjamín Mejía, del rector de la universidad, de Mario Zamora y muchos otros asesinatos con los cuales se buscaba quebrar las posibilidades de conformación de un frente amplio contra el proyecto duartista de los norteamericanos. El asesinato de Enrique Alvarez, por ejemplo, se concibió para contrarrestar cualquier influencia que éste pudiera ejercer para conformar un sector progresista de empresarios, quienes entrarían en alianza con el FDR–FMLN. Aquí cabe que nos hagamos otra pregunta hipotética: ¿se habría podido mantener Duarte y la democracia cristiana en el poder durante estos 5 años, sin llevar a cabo el genocidio de los años 1980 y 1981? ¿Qué implicaciones hubiera tenido para el plan norteamericano y para Duarte el mantenimiento del empuje popular, las divisiones en el ejército y la oposición clara de la Iglesia con Monseñor Romero a la cabeza?

Toda esta problemática no fue resuelta con reformas ni apertura democrática, sino con asesinatos de figuras prominentes como Monseñor Romero, con el exilio de decenas de oficiales del ejército y dirigentes democráticos, y con una despiadada represión contra el movimiento popular.

Es importante detenerse a explicar por qué, a diferencia de las aperturas democráticas producidas en el cono sur, en el marco de las crisis económicas y políticas de los proyectos dictatoriales de corte tradicional, Duarte no ha podido concretar una amnistía, juicios por los crímenes políticos, retorno de exiliados, investigación de la situación de los desaparecidos, etc. Duarte no puede tocar estos puntos porque el genocidio y la represión constituyen el eje de la política que le asignó el gobierno de Reagan. Esa es la razón de ser de su gobierno. Duarte no es, pues, un parangón de Raúl Alfonsín o Julio Sanguinetti. Duarte es más bien una nueva modalidad de Augusto Pinochet, Rafael Videla o Emilio Massera, que se inscribe en el marco de la doctrina de seguridad nacional trazada por Estados Unidos. Esto explica por qué Duarte tiene tan reducido el espacio de maniobra con el diálogo y la solución política. Los intereses que lo colocaron en el poder son los de la solución militar y el aniquilamiento de las bases de la revolución y Duarte tiene claridad sobre este papel. La bandera del diálogo es un simple juego político limitado a las necesidades coyunturales de cobertura de su proyecto. Duarte y la democracia cristiana no constituyen ningún poder en sí. Su papel es el de simples instrumentos de la política del gobierno de Reagan.

Volvemos al aspecto relativo al desarrollo de la guerra en sí misma. Ya hemos dicho que fueron subvaloradas las capacidades del movimiento revolucionario de mantener el proceso de acumulación de fuerzas muy a pesar del genocidio. En sentido estratégico general, podemos decir que la primera etapa del plan contrainsurgente constituyó un esfuerzo militar por contener un proceso de insurrección general en el campo y en la ciudad por vía del aniquilamiento y la desarticulación de la base social del movimiento revolucionario. En los años 1980, 1981 y 1982 se concentró el grosor de las matanzas.

Al analizar los resultados de este plan podemos concluir que logró contener las insurrecciones urbanas, pero asimismo el FMLN fue capaz de desarrollar una insurrección de los campesinos y trabajadores del campo en vastas zonas del país y convertir este proceso de insurrección popular en un ejército revolucionario que conquistó territorio, mantuvo vigente la situación revolucionaria e hizo fracasar los aspectos económicos, sociales, políticos y militares del plan contrainsurgente.

El 10 de enero de 1981 constituyó en sí una gran insurrección popular que tuvo su mayor fuerza en el campo con la participación masiva de los campesinos pobres y obreros agrícolas, pero que integró a muchos obreros, estudiantes, maestros y diversos sectores urbanos que se incorporaron a la lucha armada. Militarmente fue un hecho de importancia estratégica para el proceso de conformación del ejército popular. La ofensiva, analizada desde el punto de vista de los objetivos proclamados por el FMLN, apareció como una derrota. Pero desde el punto de vista del desarrollo de la correlación en el terreno militar, constituyó indiscutiblemente un salto hacia adelante en el desarrollo de la guerra popular.

Fue en el marco de la ofensiva del 10 de enero y del desarrollo de la guerra en los meses subsiguientes, donde prácticamente se definió el futuro del proceso. En sentido figurado podemos decir que el ejército, al no haber logrado aplastar la insurrección campesina en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 1981, perdió la guerra para siempre. La con-

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

solidación de un ejército popular complejizó la guerra, dio posibilidades al movimiento revolucionario de enfrentar la escalada intervencionista y de potenciar a su favor nuevas coyunturas de la lucha social que, sin lugar a dudas, se iban a presentar, ya que la crisis económica no sólo persistiría, sino que se profundizaría.

A partir del 10 de enero el FMLN logró desarrollar una práctica militar revolucionaria que le permitió mantenerse en la ofensiva contínua, derrotando cada plan estratégico que los norteamericanos se fueron trazando.

El esquema militar de los tres primeros años de guerra, a pesar de que después fue cuestionado por los mismos asesores que lo concibieron, al punto de provocar la caída del general García, era lógico y acorde a las necesidades de la guerra, desde el punto de vista del enemigo. Los grandes operativos de cerco con maniobras convencionales y el sostenimiento de muchas posiciones fijas en el terreno, trataban de impedir la expansión del FMLN y de evitar perder territorio, ya que si ésto sucedía, la guerra entraría en una fase todavía más compleja e imposible de contener. El abandono de centenares de posiciones, resultado de la presión militar del FMLN, y el paso a una estrategia de tropas móviles, aún con todo lo que se quiera decir sobre este esquema, significó la entrada del ejército en una situación de defensa estratégica. Señalamos ésto porque es importante dejar claro que no fueron los errores ni lo malo del primer esquema militar estratégico del enemigo, lo que permitió su derrota, sino la efectividad del plan militar estratégico con el cual el FMLN se planteó derrotarlo. La ofensiva militar del FMLN de los años 1981, 1982, 1983 y parte de 1984 consiguió aniquilar centenares de posiciones con un saldo de más de 15 mil bajas, 2 mil prisioneros y 5 mil armas capturadas. Estos resultados, de no existir la ayuda norteamericana, habrían llevado a punto de colapso al ejército y el FMLN habría tomado el poder.

En este contexto de gran fortalecimiento militar del FMLN, se reelaboró o se pasó a otra etapa del plan contrainsurgente. Los norteamericanos consideraban haber aniquilado la base social del FMLN, y por lo tanto, a través de Duarte pensaron contar con algún espacio para maniobrar y captar base social para su plan. Por otro lado, partiendo del errado análisis de creer que la guerra en El Salvador subsistía a partir del apoyo material desde el exterior, consideraban tener tal control del terreno en Centroamérica, que impedirían los abastecimientos logísticos para resolver así, según ellos, el problema militar planteado por el FMLN.

Según este planteamiento, la crisis del plan estratégico del ejército intentó ser resuelta con cambios en las modalidades tácticas y con el incremento de unidades y medios aéreos y terrestres hasta crear un aparato militar de tales dimensiones que, de acuerdo a su visión, no pudiera ser derrotado por el FMLN. Este fortalecimiento aparente del ejército terminó de poner la guerra en el centro de la sociedad salvadoreña. Obligó al aparato del Estado a hacer un gran esfuerzo para pelear la guerra, elevó los niveles de intervención y profundizó la crisis económica. Estos y otros factores serán los que en el futuro desencadenarán el colapso, quizás definitivo, del ejército duartista y del plan contrainsurgente norteamericano.

En una guerra popular, el papel del factor militar no es absoluto. Lo decisivo para un movimiento revolucionario es saber si ha logrado la acumulación militar necesaria que, conjugada con los factores políticos, permita cambiar la correlación de fuerzas. En 1983, a pesar de que los golpes militares del FMLN pusieron al ejército al borde del colapso militar, la inexistencia de auge en la lucha popular impidió que las victorias militares derivaran en cambios más significativos en la correlación de fuerzas. El propio gobierno y el ejército, en medio de esa crisis militar, no se sintieron tan débiles y argumentaron el aislamiento político del FMLN y la ausencia de lucha de los sectores populares. Con cierto cinismo, incluso, los demócratas cristianos hablaron de la pérdida, de la amplia base social del FMLN tal como la había mostrado en 1980. Es decir, hubo un equivocado regocijo por la aparente victoria de la política genocida.

Una característica de esta etapa de la guerra fue la calma y la estabilidad de la capital, mientras tanto, el ejército perdía territorio estratégico en el campo y unidades enteras de su fuerza eran aniquiladas por el FMLN. San Salvador constituía la vitrina de una aparente estabilidad. Pero la guerra, al alargarse y extenderse, puso en crisis el proyecto político, económico y social del gobierno, comenzando a abrir un nuevo espacio para la lucha popular. Entonces las fuerzas sociales que estaban por la paz, la solución política, la independencia y la democracia, fueron cada vez más amplias.

En un país tan pequeño como El Salvador y con la densidad de población que tiene, cada kilómetro cuadrado donde la Fuerza Armada ya no pueda sostener de manera estable su poder militar, donde no se pueda mantener la autoridad jurídico-político del gobierno y donde, de manera embrionaria o parcial, se comience a desarrollar otro poder, se terminará reflejando una evidente dualidad de poderes político-militares entre el FMLN y el ejército, lo cual constituirá un grave debilitamiento estratégico del proyecto contrainsurgente norteamericano.

En El Salvador, un país con 244 habitantes por kilómetro cuadrado, cruzado por muchas carreteras, lleno de municipios por todos los rumbos, no existe el concepto de montaña ni área rural aislada. En ese sentido, cada pulgada de terreno perdido constituye un desequilibrio vital en la guerra. Haciendo un estimado modesto del territorio donde el FMLN tiene más control o más dominio que la Fuerza Ar-

mada, podríamos hablar de unos 5 mil kilómetros cuadrados, es decir, de la cuarta parte del país. Cualquier analista, por muy superficial que sea su enfoque, se da cuenta que esto supone un proceso de pérdida de poder del ejército en el campo que lo irá dejando reducido a las ciudades.

Sobre la situación concreta en cuanto al dominio del terreno por ambas partes, existen muchas dudas y confusiones, en especial a partir de los choques conceptuales de la propaganda. Cabe, entonces, hacer una descripción sistematizada y objetiva de la situación para que cada quien saque sus conclusiones.

Existen zonas del territorio que constituyen lo que se conoce como los frentes o retaguardia del FMLN. Las mayores extensiones de este tipo de territorio se encuentran en los departamentos de Chalatenango, Morazán, Cuscatlán, San Vicente, San Miguel y Cabañas. En estos espacios hay decenas de municipios. La presencia del ejército en estas zonas se limita a los operativos o incursiones de corta duración. La extensión de estos territorios abarca ahora casi la tercera parte del país. Su ubicación general es la región norte, pero también hay espacios al sur del país, en los departamentos de San Vicente y Usulután.

Existe también otro territorio mucho más amplio donde el ejército no mantiene posiciones permanentes. Su presencia se establece en base a tropas mantenidas en movimiento constante, sin controlar todo el terreno, sino sólo parte de éste y por corto tiempo, para evitar los ataques del FMLN. En ninguno de estos tipos de territorios existe vestigio alguno de autoridad política o militar del gobierno. La suma de estos dos territorios cubre más del 50 por ciento del país y más de la tercera parte de los municipios.

El ejército, a partir de 1983, abandonó toda concepción de defensa permanente del terreno. Recordemos que primero los generales decían "estamos en todas partes" y luego pasaron a decir "llegamos donde queremos". En los primeros años de la guerra sus tropas resistían la toma de un poblado. Ahora, la concepción es que, si son atacados y se encuentran en desventaja, repliegan de inmediato sus fuerzas. En esta concepción subyace la táctica de evitar el desgaste, y también la situación moral de sus fuerzas. Esto explica por qué los ataques del FMLN a veces consiguen definir posiciones en 20 minutos de combate (como el caso de Juayúa).

En este sentido, el único terreno que el ejército defiende de manera permanente es aquel donde se encuentran ubicadas las infraestructuras económicas estratégicas y sus propios cuarteles. Incluso, en muchas ocasiones no arriesga su fuerza ni siquiera por una infraestructura económica secundaria o en la periferia de las ciudades, las cuales pueden ser así incursionadas fácilmente. En la base de todo ésto subyace la idea de evitar los golpes militares de envergadura y proclamar eso como avance.

Que la guerrilla se esconda, golpee y se retire y que no defienda el terreno es algo lógico. Pero que en un país donde no hay selva, batallones enteros del ejército tengan que andarse escondiendo y no defiendan el terreno para evitar los golpes militares es evidente debilidad y deterioro moral. Así podemos también comprender por qué el FMLN recurre a las acciones guerrilleras de desgaste, pues no está en disputa el terreno, sino dos cosas: incorporar a todo el pueblo a la guerra y ser capaces de desgastar en profundidad al contrario.

Otro elemento que es de inquietud general a la hora de analizar el estado de la guerra es la falsedad o veracidad de los datos militares sobre las bajas causadas, las operaciones, las armas capturadas, etc. Al cambiar las modalidades tácticas de combate, hay cambios en la forma de percibir el desarrollo de la guerra. Por ello, para evitar errores, quienes quieran ser objetivos deberán integrar al análisis de los datos, el cumplimiento de objetivos trazados en los planes de ambas partes y la conducta de las fuerzas en el terreno. No resulta difícil concluir que el FMLN está imponiendo un elevado desgaste al ejército, si no, veamos como éste ha tenido que acrecentar sus recursos bélicos y el reclutamiento forzoso. Por su lado, el FMLN ha dado golpes de importancia en puntos donde antes no había guerra, mantiene un sabotaje de dimensiones elevadas y obliga al ejército a asumir una conducta política y militar sobre la cual confiesa que no está teniendo ningún éxito en sus planes.

De ser cierta la cifra de casi 3 mil bajas del FMLN y solamente 2,500 del ejército, como lo aseguró el alto mando en su último balance, la conducta política y militar de las partes en guerra tendría que ser diferente. Es evidente que el FMLN no aparece, ni remotamente, acosado, ni en desventaja, en tanto que el ejército y el gobierno tienen una obvia conducta de preocupación y retroceso. Vencer, para el ejército, sería poder detener la expansión del FMLN, lograr romper sus vínculos con las masas; sería poder aniquilar las unidades estratégicas del FMLN que acechan y golpean objetivos estratégicos.

El plan estratégico con el cual el FMLN derrotó la estrategia del general García permitió romper la defensa de las áreas vitales, crear condiciones para llevar la guerra a todo el territorio y vincular a las guerrillas con las masas. En ese sentido, lo correcto y acertado era que el FMLN pasara a una estrategia más política, la cual le permitiera conjugar la lucha política con la lucha militar. Aquí cabe señalar algo que es de suma importancia. No es la guerra aérea, ni son los cambios de táctica en el ejército los que obligan al FMLN a expandir la guerra. Habría sido un gravísimo error si habiendo roto la defensa de las áreas vitales, habiendo acumulado experiencia militar y cuadros, y estando en proceso una coyuntura favorable para la lucha popular, el FMLN se hu-

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

biera empeñado en librar la guerra sólo en sus frentes tradicionales, alejado de las masas que habitan las áreas vitales, con el peligro de agotar sus reservas humanas y olvidándose de que debía aprovechar al máximo las condiciones generadas por el avance militar para desarrollar una estrategia de integración de todo el pueblo a la guerra en todo el territorio y bajo todas las formas posibles.

En el nuevo plan contrainsurgente del ejército hay tres elementos claves. En primer lugar, reducir la guerra a las zonas más alejadas de las ciudades, aislando a la fuerza militar del FMLN y sometiéndola a desgaste. En segundo lugar, separar la lucha política de la lucha reivindicativa para evitar que ésta se uniera a la guerra. Y por último, reducir los simpatizantes del FMLN a pequeños grupos radicalizados y a bases campesinas dentro de las zonas conflictivas. Estas últimas debían ser disputadas en un primer momento, separadas en un segundo y aniquiladas si persistían en su apoyo al FMLN, en un tercer momento.

Como podemos ver, el propio enemigo está claro de que la guerra se define en términos de quién logre el apoyo popular. Por ello, en este momento analizar la guerra sólo desde las modalidades tácticas o de la situación de medios y fuerzas, sería un análisis simplista y sin mayor valor.

Los cambios operados en el plan del FMLN, no son una simple readecuación táctica. Es el arribo a una fase más avanzada en la estrategia de la guerra de todo el pueblo, la cual busca sentar las bases que le permitan pasar a la contra-ofensiva estratégica, en relación con el desarrollo de los factores militares, políticos e internacionales. El problema en estos momentos ya no es estrictamente militar. El plan de crecimiento de las fuerzas y medios del ejército está resultando y resultará insuficiente para contener la estrategia política y militar que está imponiendo el FMLN.

El auge de la lucha popular que se está desarrollando muestra que se está abriendo una nueva crisis nacional en la situación revolucionaria. La existencia de la guerra y, sobre todo la incapacidad del ejército de vencer al FMLN, hacen de la paz un obligado tema de la lucha política de todo el pueblo, de sectores de la empresa privada, de los sectores medios, de todos los partidos y fuerzas políticas e incluso de la misma Fuerza Armada.

En consecuencia, con voluntad o sin ella o el trabajo político del FMLN, resulta imposible separar la lucha reivindicativa de la lucha política si la guerra está en el centro de la vida nacional. El mismo Duarte llama a todos los sectores a darle apoyo para la guerra. Esto convierte la paz en bandera política de todo el pueblo y de todos los sectores, quitando al gobierno la posibilidad de impulsar en serio la bandera del diálogo y la paz. La Palma y Ayagualo son la prueba. En ese sentido, por una razón política estructural, es imposible que el plan contrainsurgente de los norteamericanos tenga alguna posibilidad de éxito.

Los últimos hechos son prueba de lo anterior. Hay un evidente y creciente auge de la lucha popular expresado en constantes huelgas y manifestaciones y que ahora está siendo abonado por medidas económicas anti-populares, necesarias para mantener al ejército en guerra. De esta manera, se ha generado una contradicción entre la intencionalidad política de disputar a las masas y las necesidades militares impuestas por la profundización y extensión de la guerra por parte del FMLN y la voluntad de Reagan de sostener solamente la solución militar al conflicto.

La situación a nivel de gobierno y de la estructura de poder se está encaminando hacia la creación de un vacío de poder, el cual profundiza la conspiración con la democracia cristiana y abre espacio a un consenso nacional por la paz, por la democratización y contra la intervención.

La supuesta base social que debería haber conformado el proyecto duartista se ha esfumado y es inexistente. Lo fundamental para Duarte ahora es la guerra, porque eso es lo que está determinado por la política del gobierno de Reagan. Toda idea de reforma o juegos políticos para confundir o intentar ganar base han sido abandonados. Es ya inevitable el choque violento y generalizado del ejército y gobierno duartista con los sectores populares.

Estratégicamente, el ejército y el gobierno no tienen ninguna posibilidad de ganar apoyo porque no tienen capacidad de concesión, ni posibilidades de estructurar una política que les sirva, por lo menos, para confundir al pueblo. Los planes del gobierno de construirse una base social se fundamentaban en la corrupción de los dirigentes, a través del financiamiento de organizaciones y gremios por parte de organismos vinculados a la AID y a la CIA. Esta política dividió organizaciones, hizo chocar a las bases con los dirigentes y terminó dejando al PDC aislado.

La estrategia del PDC fue la de engañar con una plataforma que no estaba dispuesto a cumplir, en tanto corrompía a los dirigentes ofreciéndoles cargos en el gobierno y financiamiento que en nada resolvían los problemas de las bases de las organizaciones, pero que enriquecían a los dirigentes. De todo ésto, al PDC le quedaron solamente cascarones y dirigentes traidores que no representan a nadie. El resto de sectores pasaron a la oposición. La movilización misma de la UNOC, la cual en su etapa previa debió ocultar o disminuir su nexo con el gobierno, no representa en esencia un apoyo. El papel de estas organizaciones en el proyecto demócrata cristiano ha sido el de contener y desmovilizar las bases. Esto obligó a que la movilización requiriera presiones y grandes recursos financieros, pero ésto es, en última instancia, secundario. Lo más importante es que se llevó a cabo con una plataforma en contradicción con la política del régimen. Para el gobierno fue un

recurso táctico forzado por la crisis y la pérdida de apoyo. Ello lo obligó a jugar con fuego, ya que puso a estas organizaciones a pedir el diálogo en un momento en el que la política de Reagan sólo deja espacio para la guerra y los puso a exigir la profundización de las reformas, cuando Duarte busca atenuarlas pactando con la oligarquía. Es un juego similar al de las elecciones y al del pacto social, sólo que ahora se encuentra más desgastado y con menos fuerza.

Duarte podrá seguir comprando dirigentes, pero mientras no pueda cumplir las demandas de las masas, jugar a movilizarlas y a agitarlas es atizar el fuego en su contra y eso lo saben bien el ejército, la oligarquía y los norteamericanos.

Los intereses estratégicos que defienden ambos bandos están manifiestos y nadie va a confundirse. Está claro que el FMLN–FDR representan una fuerza nacional, la cual defiende intereses populares y busca cambios profundos en el país. También está claro que el gobierno y el ejército representan intereses anti-nacionales y anti-populares que buscan perpetuar los privilegios de las minorías dominantes.

Las ilusiones de Reagan y de la CIA de que Duarte era la marioneta perfecta de su plan han ido desapareciendo con la misma velocidad con que el Pentágono se ha ido percatando de la imposibilidad de derrotar al FMLN. Los norteamericanos han comenzado a interpretar las razones de sus fracasos y a examinar la posibilidad de un recambio. El descontento de los norteamericanos y del ejército con Duarte es cada vez más grande. Ello profundiza la conspiración en la estructura de poder y dentro del propio PDC, el cual está sufriendo anticipadamente la crisis de la sucesión.

El enfrentamiento generalizado del ejército con el pueblo es cada vez más evidente. Los conceptos "democratización y pacificación" estaban ligados al exterminio y neutralización del movimiento popular, pero al no producirse esto último se va elevando la represión y va quedando más claro el papel contrarrevolucionario y títere de Duarte y de la democracia cristiana.

En la actualidad existe represión en gran escala, expresada en bombardeos directos con el fin de aterrorizar y despoblar, desalojo masivo de población en zonas conflictivas, asesinato y desaparecimiento de dirigentes del movimiento popular revolucionario, aplicación sistemática de tortura a los presos políticos, amplia actividad de los cuerpos de seguridad bajo el nombre de escuadrones de la muerte y un incremento acelerado de los presos políticos. La supuesta disminución o mejoría en los derechos humanos es un juego de números vinculado a los altibajos de la lucha popular. Veamos esto más detenidamente. Los años en que hubo más violaciones a los derechos humanos fueron precisamente los de mayor actividad del movimiento popular en las ciudades y cuando el ejército intentó parar el avance del FMLN en el campo, matando y desolando poblaciones enteras. Esto sucedió fundamentalmente en 1980 y 1981. Después de esos años comenzó a disminuir la matanza. Pero, ¿es moral y lógico hablar de una disminución después de haberse consumado un genocidio? También después de 1932 hubo una disminución en la matanza.

En los años siguientes, para continuar matando masivamente sólo había dos alternativas: matar a los militantes del FMLN, pero éstos estaban armados y eso ya no era fácil, o comenzar a matar a cualquiera que anduviera por las calles sin importar quién fuera ni por qué, aunque mucho de ésto lo hicieron y lo siguen haciendo.

Los asesinatos no han disminuido porque Duarte haya controlado la situación, sino porque ya no tenían muchos enemigos visibles a quienes matar y porque consideraban que los 50 mil muertos y el exilio de varios cientos de miles eran suficientes para la pacificación. Después de los 50 mil muertos evaluaron que la represión podía ser dosificada y selectiva para mantener el control y evitar un nuevo auge popular: Esto es precisamente lo que han estado haciendo.

Un enfoque serio sobre las violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, no puede asentarse en una teoría númerica, sino en el hecho de que este gobierno ha cometido un genocidio y persiste en continuar matando gente en la proporción que lo planteen las necesidades y las posibilidades de la coyuntura política y militar. Este gobierno mantiene y ha fortalecido su capacidad para ejecutar un nuevo genocidio ya que los muertos están muertos, los presos siguen presos, los desaparecidos siguen desaparecidos y los asesinos siguen matando gente, solamente que ahora reciben charlas sobre los derechos humanos. Nadie los ha juzgado y, por el contrario, están en los mismos o mejores puestos que antes. Está claro que el ejército es una estructura esencialmente represiva que mata selectivamente o en masa cada vez que lo necesita. El problema del carácter represivo del ejército no lo resuelve el cambio de cuatro coroneles desprestigiados por otros cuatro menos desprestigiados. Muchos de los oficiales y soldados prisioneros de guerra del FMLN siempre confesaron tener más temor a su propio ejército que al FMLN. Ahora, al incrementarse la actividad organizativa del pueblo, las huelgas, las movilizaciones populares y las protestas; ahora al volverse evidente la impotencia del ejército para vencer al FMLN, los coroneles y generales han vuelto a sentirse presionados para ejecutar masacres, reprimir en masa, cortar cabezas, acusar a todo el mundo de ser del FMLN, torturar y despedazar gente a diestra y siniestra.

Pero las condiciones políticas para reprimir masiva y descaradamente han variado; no por voluntad de Duarte, sino por un problema de correlación nacional e internacional. Por eso, la represión tiene

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

en algunos momentos características vacilantes y vive las crisis de los deseos y de la impotencia. El deseo de matar a los civiles se conjuga con el temor a que tomen las armas y se unan al FMLN el cual ahora es más fuerte. Hoy los generales saben que un excesivo desprestigio por la represión pondría en peligro la aprobación de la ayuda militar y económica, que es lo único que los mantiene a flote; por eso los coroneles y generales hacen el rídiculo al lanzar toneladas de bombas, quemando casas y cultivos primero, para luego hacer piñatas y repartir maíz, en medio de discursos en los cuales amenazan con matar a los pobladores si apoyan a la guerrilla.

No es un secreto que, cuando comenzó a producirse el auge de la lucha popular, muchos mandos del ejército comentaron la necesidad de reprimir para evitar que la lucha creciera, pero que la represión contemplaba el riesgo de acelerar su crecimiento. En este intento de contener el proceso de la lucha popular fueron asesinados 44 sindicalistas. Los asesinatos eran parte de un plan de guerra especial, diseñado por el estado mayor y los asesores norteamericanos en 1983, pero dicho plan no pudo contener la lucha popular.

Las acciones de desalojo masivo de población, el asesinato selectivo de pobladores de las zonas conflictivas, los bombardeos, la quema de cultivos y casas, el corte de los abastecimientos, medicinas y alimentos a las zonas, constituyen una expresión de impotencia de la política represiva. Bajo otras condiciones políticas y militares, sin duda, los coroneles habrían preferido el exterminio en masa de la población. Por eso, precisamente, ahora recurren a formas de exterminio indirecto como el condenar a la población al hambre, a las enfermedades y al desplazamiento forzado. El ejército desaloja constantemente a miles de personas de las zonas de guerra, pero sin ofrecerles ninguna otra alternativa para sus vidas. Con todo ésto lo único que se está haciendo es acrecentar la crisis social y el descontento, y reforzar en la población la idea de que la guerra del FMLN es justa y, por lo tanto, que es necesario apoyarlo a él y no al ejército.

Quien quiera encontrar la explicación de por qué la población no sólo tolera, sino que a veces, hasta participa en las operaciones de sabotaje, que analice la conducta histórica del ejército, la extrema crueldad con la que ha reprimido, el desprecio con el que ha tratado al pueblo, las decenas de miles de salvadoreños que ha matado y continúa matando injustamente, y entenderá entonces que, a pesar de la prolongación de la guerra, de su complejidad y de su cuota de sacrificio, el pueblo no se confunde, tiene principios y razones de sobra para saber que la guerra es justa. No son pocos los salvadoreños que piensan que es la fuerza del FMLN la que ha obligado al gobierno a respetarlo un poco en algunos momentos. Hay situaciones en la que esto se evidencia más. Por ejemplo, cuando la guerrilla plantea mejores salarios, el ejército lanza operativos para que los terratenientes paguen menos; o en otro sentido, el ejército ha pedido públicamente a los terratenientes pagar mejores salarios porque la guerrilla ya llegó a esa zona. En ese contexto, nadie se pierde y todos saben quién representa sus intereses. Por lo tanto, no es casual que todos los reclamos sean contra el gobierno. Aquí cabe resaltar el error de Duarte y de la democracia cristiana al creer que su presencia en el gobierno iba a provocar el olvido histórico de 5 décadas de represión.

Con toda seguridad comenzará a aparecer la idea de un nuevo "genocidio necesario". Solamente que ahora, no sólo resultará inútil, sino también reversible. El dilema que tienen planteado los norteamericanos en su plan contrainsurgente, ejecutado por Duarte y el ejército, es el siguiente: si no hacen un genocidio para contener la lucha popular, perderán la guerra y si hacen un genocidio, en el intento de contener la lucha popular, acelerarán todos los factores políticos y militares en su contra y perderán la guerra.

En 1981 los norteamericanos evaluaron que la guerra era más un problema político que militar; trataron de ganarla con un genocidio y no lo lograron. En 1983 los norteamericanos consideraron que la guerra era fundamentalmente un problema militar y se plantearon ganarla, haciendo crecer al ejército y tampoco tuvieron éxito. Para los norteamericanos la guerra en 1986 se ha convertido en un problema político y militar de mayores dimensiones para el cual ya no tienen solución, ni con genocidio ni con ayuda militar.

La correlación de fuerzas que se va configurando les es totalmente adversa. El sólo intento de una represión en gran escala provocará una crisis de tal envergadura que provocará una situación internacional totalmente adversa; la política intervencionista de Reagan se desgastará y se debilitará y generará una coyuntura latinoamericana y centroamericana opuesta a cualquier intervención. En el plano interno, el poder militar del FMLN, basado en los altos niveles de unidad que ahora posee, aprovechando la dualidad de poderes, la retaguardia, su voluntad de fuego, sus reservas logísticas y el nivel de organización de las masas trabajadoras, tomará la ofensiva e impedirá la profundización de la represión, generándose las condiciones para una contraofensiva estratégica.

Desde el punto de vista del alineamiento de otras fuerzas sociales en el proceso de guerra, la situación se presenta muy difícil para Duarte. El proyecto norteamericano está desgastado, no sólo frente a las clases populares, sino dentro de la propia estructura de poder económico-político. Dentro de poco lo estará también dentro del ejército, ya que existen varios puntos de consenso entre cada vez mayores sectores de la sociedad. Estos puntos de consenso son: en primer lugar, que el ejército no le

puede ganar la guerra al FMLN; en segundo lugar, que es necesario detener el proceso de intervención y encontrar la forma de rescatar nuestra independencia, ya que el nivel de endeudamiento y la pérdida de capacidad para tomar decisiones se ha vuelto intolerable; y por último, que es necesario buscar una solución política negociada, ya que sólo la paz permitirá reactivar la economía.

Estos puntos de consenso constituyen un reconocimiento de hecho de la existencia de una dualidad de poderes y, por lo tanto, manifiestan la inclinación de la mayor parte de la sociedad por la tesis de que el gobierno y el ejército están debilitados.

La perspectiva: el colapso del régimen y la victoria del FMLN

Militarmente a estas alturas del desarrollo de la guerra, la tesis más generalizada es la del equilibrio. Esta tesis plantea que el ejército no puede vencer a la guerrilla, pero que tampoco la guerrilla puede vencer al ejército. Los oficiales del alto mando y, en mayo de 1984, el propio embajador norteamericano pusieron el énfasis no en las posibilidades del ejército para vencer a la guerrilla, sino en haber logrado una aparente estabilización de la situación militar que imposibilitaba una victoria del FMLN. Para ellos esta estabilización era un éxito. En estas afirmaciones está implícita la imposibilidad del ejército de vencer al FMLN y pone en duda la capacidad del FMLN de obtener una victoria militar. Estos planteamientos son un reconocimiento del nivel de desarrollo militar alcanzado por el FMLN y si tenemos en cuenta los volúmenes de ayuda, la disparidad de fuerzas y medios y el nivel de intervención de los norteamericanos en la guerra, podemos concluir que el FMLN tiene la ventaja y que el supuesto equilibrio tiene más posibilidades de romperse a favor del FMLN que de las fuerzas armadas.

El sólo hecho de que la tesis del equilibrio militar sea la dominante entre las opiniones de la mayoría de sectores e incluso entre las propias fuerzas armadas, constituye un elemento importante porque en el marco de la lucha política contribuirá en gran medida al colapso el plan contrainsurgente y, por consiguiente, a una derrota militar del ejército. No debemos olvidar que el sólo hecho de hablar de un equilibrio cuestiona la política del gobierno de Reagan para El Salvador, profundiza las presiones internas por la solución negociada, desmoraliza al ejército y empuja al gobierno a una crisis que lo puede llevar a un vacío de poder al perder la credibilidad de todos los sectores en su plan.

Hasta aquí hemos analizado las ventajas que para el FMLN se derivan de la idea del equilibrio. Pero es más importante probar cómo la estrategia político-militar del FMLN hará colapsar, a no muy largo plazo, a la Fuerza Armada y a todo el plan contrainsurgente de los norteamericanos.

Es falso que la guerra esté en un *impasse*. En términos conceptuales podemos hablar de una fase de equilibrio estratégico en la guerra popular, pero es falso que la guerra esté en un *impasse*. El concepto de equilibrio estratégico en la guerra popular tiene otro sentido. Es precisamente el momento cuando las fuerzas revolucionarias han salido de la defensiva estratégica y se están acercando a la posibilidad de una contraofensiva. Puesto que las perspectivas de victoria en una guerra popular residen en la correcta y favorable conjugación de los factores militares, políticos, sociales e internacionales, podemos afirmar que el FMLN tiene un curso de acumulación de fuerzas que le permitiría obtener la victoria aún cuando se produjera una intervención directa de los norteamericanos.

Algunos de los conocidos planteamientos del alto mando son extremadamente simplistas y revelan una visión estratégica muy pobre. Se centran en describir que ahora el ejército cuenta con más batallones, con más helicópteros, con más piezas de artillería, con fábricas de uniformes, con una fábrica procesadora de comida, con un hospital militar muy grande y hasta con su propia funeraria. Hablan de que pueden llegar donde quieren, que rápidamente pueden socorrer tropas en situación difícil, que tienen un departamento de guerra psicológica, una radioemisora, un organismo de prensa y un centro de entrenamiento para sus tropas. Estas ideas adolecen de mucha pobreza estratégica al excluir los factores sociales y políticos y tratan de establecer y absolutizar la siguiente tesis: "tenemos un ejército tan grande y los norteamericanos nos ayudan tanto que no nos pueden ganar la guerra".

Sin entrar en muchos detalles podemos señalar que el crecimiento del ejército es una respuesta a la complejización de la guerra, como resultado de los avances del FMLN, y que el crecimiento tiene límites que están dados por la capacidad que tenga el Estado de asimilar la ayuda. En ese sentido, la historia de las guerras populares es aleccionadora. Recordemos que Somoza comenzó la guerra con 7 mil guardias y la perdió con 15 mil; Batista la comenzó con 30 mil y la perdió con 70 mil; los norteamericanos comenzaron la intervención en Vietnam con 3 mil asesores que apoyaban a un ejército de 125 mil efectivos y perdieron cuando tenían medio millón de soldados y la tercera parte de su fuerza aérea apoyando a un ejército de 1.2 millones de sub-vietnamitas.

En ninguno de los casos se definió la guerra a favor de los revolucionarios porque éstos llegaran a contar con más fuerzas y medios materiales que los del bando contrarrevolucionario. Lo que definió la guerra a favor de los revolucionarios fue el hecho de que supieron conjugar acertadamente los recursos y medios militares que tenían con la lucha política y la integración de todo el pueblo a la guerra. En esta

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

estrategia, el papel de los medios materiales es relativo. Lo importante es contar con una experiencia y una capacidad militar básica y con los medios fundamentales necesarios para potenciar la participación de todo el pueblo como factor decisivo la guerra. Hipotéticamente se puede afirmar que menos de mil fusiles en manos de los revolucionarios salvadoreños en los primeros meses de 1980 hubieran bastado para ganar la guerra en ese momento. El FMLN cuenta con la experiencia militar y los medios materiales suficientes, los cuales, combinados con una estrategia de guerra popular, pueden vencer a un ejército mucho más grande que el creado actualmente por los norteamericanos.

En otra parte de este análisis señalamos que los cambios en el plan estratégico del FMLN no obedecieron a una razón defensiva, sino a una necesidad ofensiva para alcanzar una etapa más avanzada de la guerra popular. Veamos, sintéticamente, algunos de los elementos del plan estratégico del FMLN para probar cómo su combinación y desarrollo irán creando una situación insostenible para la Fuerza Armada hasta el punto de derrotarla.

La expansión de la guerra busca abarcar todo el territorio. No se trata de una concepción pasiva de traslado o de simple ubicación de fuerzas que distraigan, hostiguen o dispersen al ejército. La dislocación actual de las fuerzas del FMLN está relacionada con un vasto plan de organización de las masas y de creación de contingentes milicianos y guerrilleros, los cuales irán conformando múltiples direcciones de ataque sobre las áreas vitales. En el proceso de conformación de esta fuerza juegan un papel fundamental las armas populares, la utilización al máximo del explosivo y la vasta experiencia militar del FMLN para operar con cualquier modalidad táctica, de acuerdo al desarrollo de las fuerzas locales. Es decir, que la expansión de la guerra permitirá al FMLN desarrollar y hacer crecer su ejército popular ligándolo mucho más a las masas populares. El FMLN está preparando una fuerza más grande y con más capacidad que la fuerza que acabó con todas las posiciones de la zona norte; solamente que ahora no disputará pequeños pueblos, sino las áreas vitales, es decir, la conquista de la victoria definitiva.

La posibilidad o imposibilidad de que esto pueda o no concretarse dependerá de si las masas se integraren o no a la guerra. Estas condiciones, si tenemos en cuenta los elementos políticos planteados en la primera parte de nuestro análisis, son obvias. Precisamente, el interés estratégico de los norteamericanos de alejar al FMLN de las áreas vitales reside en el reconocimiento de que si la guerra se expande hacia las masas más politizadas y con mayores niveles de organización, el avance del FMLN se volverá incontenible.

La operación Fénix en Guazapa, además de ser un intento inútil de levantar la moral de un ejército que no conoce las victorias, sino sólo las derrotas y frustraciones, es también un esfuerzo desesperado por alejar al FMLN de la explosión social que la crisis económica está produciendo en las masas de la capital.

El FMLN, mediante la expansión de la guerra y la organización popular, cuenta con una ventaja insuperable por el ejército, la reproducción y crecimiento de su fuerza. Mientras el FMLN busca crecer favorecido por una ventaja política, el ejército lo intenta hacer mediante una mayor generalización del reclutamiento forzoso, profundizando así el descontento popular y el rechazo a la Fuerza Armada.

El apoyo de las masas, la experiencia conspirativa del FMLN y la recuperación de medios al enemigo cuando así se requiere, son suficientes para asegurarse la logística necesaria para librar la guerra. Lo que en Vietnam fue la ruta de Ho Chi Min, en El Salvador es la experiencia conspirativa del FMLN y el apoyo popular. Estos dos factores son tan indestructibles como lo fue la ruta de Ho Chi Min. El desarrollo en calidad y cantidad del poder armado del FMLN es ya incontrolable si se tiene en cuenta la extensión del territorio, la cantidad de población, el nivel de explosividad social y la cantidad de retaguardias y frentes guerrilleros que tiene el FMLN en el país.

El análisis numérico de hombres armados es un asunto de inteligencia y de un valor relativo. Pero tomemos como cierto el dato de 6 mil hombres que dice el ejército que tiene el FMLN y tratemos de especular un poco. Los fusiles, los tiros y el volumen de los explosivos del FMLN, sumado a su experiencia en todo tipo de combate y ligado al descontento de las masas en un país de apenas 21,000 kilómetros cuadrados, nos lleva a concluir que el ejército salvadoreño está perdido y que no lo salva ni la ayuda norteamericana, por muy grande que ésta pueda ser. Los factores humanos y políticos, en un momento de colapso y máxima crisis, no los resuelve ni la ayuda ni la intervención, pues son factores con límites físicos, políticos y temporales. Si la dimensión del movimiento guerrillero salvadoreño, la ubicamos, en términos relativos, en un país tan grande como Chile, estableciendo condiciones similares de frentes por todo el territorio, cerca de las ciudades y carreteras estratégicas y con miles de hombres armados y vinculados al pueblo, con toda seguridad, los revolucionarios chilenos serían capaces de resistir y vencer a muchas decenas de divisiones del ejército norteamericano.

El plan de desestabilización, cuyo objetivo es quebrar las bases de la economía de guerra y a la vez impedir la materialización del proyecto de modernización capitalista con el cual se pretende reactivar la economía y hacer sobrevivir al sistema, no puede ser contenido por el ejército. La pequeñez del territorio que en un tiempo se pensó como desventaja, aparece ahora como una enorme ventaja para el FMLN. Todas las carreteras estratégicas están

al alcance de sus fuerzas y en la medida en que se consolida el proceso de expansión y desarrollo de nuevas fuerzas, se van cubriendo todas las carreteras del territorio. Lo mismo puede decirse con relación al sistema de distribución de energía y a las áreas de cultivos de exportación, las cuales son el pilar fundamental de la economía.

Todo esto plantea al FMLN la posibilidad real de ir ahogando la economía de guerra y volviendo inviable todo proyecto e idea de reactivación del sistema. Este problema se presenta como militarmente irresoluble para el ejército, por mucho que trate de crecer.

Debemos dejar claro que cuando hablamos de colapso nos referimos al colapso del poder político-militar y no al colapso de la economía en sí, ya que ello en sí mismo, no tiene mayor valor y la economía siempre mantendrá niveles de sobrevivencia. Lo importante es quebrar la capacidad de la economía para mantener la guerra. El plan de desgaste de las fuerzas vivas del ejército busca su debilitamiento moral mediante el sangramiento constante, atacando los operativos y patrullajes, multiplicando las operaciones guerrilleras (emboscadas, golpes de mano) y ejecutando sistemáticamente operaciones estratégicas de mediana y gran escala. Esto eleva el desgaste y la crisis moral del ejército y se inserta en el auge de la lucha popular, contribuyendo a la moralización de las masas y a generar en éstas la confianza en la victoria. El volumen de las acciones guerrilleras será cada vez mayor. En ellas, juegan un papel fundamental las milicias y guerrillas clandestinas y las mismas masas integradas a la guerra.

El volumen, la complejidad y la diversidad de las tácticas operacionales, los tipos de fuerza y la combinación de armas populares y convencionales, en todo el territorio, en las áreas urbanas, sub-urbanas y rurales, y en la propia capital, constituyen una mortal combinación para el ejército. Este no puede cubrir todo el terreno ni puede proteger la economía ni las estructuras de poder porque tiene planteada la contradicción entre la dispersión y la concentración, y entre la defensa permanente del terreno y la defensa en movimiento de sus tropas. En síntesis, lo obliga a no tener iniciativa y a tener que reaccionar defensivamente, de acuerdo al plan estratégico del FMLN. Si no pudo contener la guerra cuando ésta se libraba en 9 frentes principales y con menos planteamientos tácticos, mucho menos la podrá contener ahora, cuando se está librando en todo el territorio y con todo tipo de táctica.

A medida que avanza el plan del FMLN se va viendo con claridad su éxito y la incapacidad del ejército para contenerlo. La desestabilización y la expansión de la guerra presionan al enemigo a la defensa de carreteras, infraestructuras y zonas productivas. Esto vuelve insuficiente a sus tropas, obligándolo a nuevas necesidades de crecimiento.

El desarrollo del frente occidental, la presencia de unidades guerrilleras y comandos urbanos en la periferia de la capital y otras ciudades, al igual que la presencia guerrillera en los departamentos de La Paz y La Libertad, van conformando un desequilibrio operacional que lo fuerza a romper la lógica de sus planes. La coyuntura política también trabaja en ese sentido al obligar al ejército a una acción defensiva de concentración de fuerzas contra el frente más cercano a la capital con la tardía idea de impedir que las guerrillas se vinculen a las masas urbanas.

La ejecución de operaciones guerrilleras de inteligencia constituyen un valioso factor de cooperación político-militar para el avance general del plan estratégico del FMLN sin que el ejército pueda contenerlas. El FMLN ha ejecutado tres importantes golpes de inteligencia en el último año y medio. La ejecución del coronel Monterrosa dejó al ejército con un vacío de liderazgo que lo mantiene con un mando disperso, dividido, compartido e incapaz. La ejecución de los asesores en la zona rosa evidenció la dependencia, señaló al enemigo principal y dejó claro cuál es el punto más débil de la política del gobierno de Reagan, cuando éste amenazó con bombardeos de represalia sobre los frentes del FMLN. La captura y canje de la licenciada Inés Guadalupe Duarte y los alcaldes, llevados a cabo en el marco de una intensa actividad militar, con paro del transporte, sabotaje, desgaste, y la operación estratégica de ataque al CEMFA, debilitaron enormemente al gobierno de Duarte, profundizaron las contradicciones y moralizaron a todo el pueblo. Esto prueba que el apoyo popular constituye un poderoso e indestructible aparato de inteligencia que permite aprovechar cualquier debilidad enemiga para dar golpes de gran importancia con la táctica, la fuerza y los medios apropiados en orden a asegurar su ejecución. La amenaza permanente de estas operaciones desestabiliza al mando enemigo porque le lleva la guerra directamente a él y lo obliga a destinar tiempo, fuerzas y medios a la creación de un enorme y costoso aparato de seguridad.

La táctica de tropas móviles se concibió como medio para evitar ofrecer blancos fijos al FMLN y detener así el desgaste que sufrían sus fuerzas con los aniquilamientos masivos de tropas en posiciones. Ese planteamiento implicaba el abandono de la defensa permanente de decenas de municipios, eliminando las posiciones pequeñas y medianas y limitando la defensa permanente a objetivos mayores. Su defensa se basaría en la posibilidad de ser fácilmente reforzados por estar cerca de las áreas vitales con bastante tropa y fortificación del terreno. La lógica del plan era dejar al FMLN sólo objetivos mayores en los cuales necesitara usar grandes concentraciones de fuerza para atacarlos y mantener a la vez tropas móviles en operativos y patrullajes permanentes; éstas apoyadas por la guerra aérea, impedirían las concentraciones del FMLN. Esta concepción buscaba parar la desmoralización total a la cual se aproxima-

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

ban sus tropas que ya no estaban dispuestas a seguir defendiendo terreno. Asimismo supuso que el FMLN se aferraría a sus esquemas tácticos anteriores.

Así como en el primer plan estratégico del enemigo, el FMLN aprovechó la existencia de muchas posiciones menores para aniquilarlas una a una, causando gran cantidad de bajas al ejército, ahora se propuso convertir cada operativo y cada patrullaje del nuevo plan en un objetivo militar al cual había que desgastar y causar la mayor cantidad de bajas posibles, utilizando la táctica y el armamento que le permitieran ser efectivo con gran economía de fuerza y medios.

El sólo hecho de que el FMLN tomara la iniciativa contra los patrullajes, usando tácticas adecuadas para mantener y aumentar el desgaste causando bajas al ejército, quebró la idea inicial del enemigo en cuanto a que los patrullajes y los operativos desestabilizarían el plan de FMLN. Ello fue posible porque el FMLN los convirtió en el objetivo central de su plan. El enemigo pensó que era muy difícil que el FMLN encontrara respuesta adecuada a la táctica de tropas móviles, ya que consideraba era difícil realizar emboscadas, ataques o maniobras a fuerzas que no tenían rutina en movimiento ni ofrecían blancos fijos en el terreno. Pero el FMLN ha logrado, aplicando otras modalidades tácticas (combate con pequeñas unidades, golpes de mano, campos minados al avance, francotiradores, etc.), mantener y aumentar las bajas del ejército en los operativos y patrullajes, al punto de que en este momento, lo que se supuso sería el eslabón ofensivo del plan del ejército, se ha convertido en la causa principal de sus bajas y del desgaste físico, psicológico y moral de sus fuerzas.

El planteamiento del enemigo no ha sido efectivo, porque no ha desestabilizado al FMLN ni ha impedido que éste dé golpes militares de importancia, ahora en nuevos teatros de operaciones, cerca de las ciudades y de las áreas vitales (CEMFA, Picacho, Cerro Piedra Colorada, Guazapa, Santa Lucía, Guarnecia en Santa Ana, y Juayúa en Sonsonate, la cooperativa El Martillo en Usulután). Las operaciones estratégicas en el área vital aumentan el impacto político de la guerra, puesto que son golpes inocultables que motivan a las fuerzas más politizadas a integrarse a la guerra.

El FMLN mantiene la iniciativa estratégica y táctica porque define cómo, cuándo y dónde va a actuar su fuerza; ha extendido el dominio operacional del terreno y mantiene la capacidad de concentrar y golpear puntos estratégicos, ahora en zonas más importantes que en los primeros años de la guerra.

En las zonas vitales, el enemigo sufre un desequilibrio entre su táctica de patrullaje y la cantidad de objetivos que debe proteger. En las zonas donde aplica la táctica de tropas en movimiento para evitar golpes del FMLN, la situación es tan inestable y defensiva que desgasta física y psicológicamente a sus hombres, sin lograr detener el desgaste guerrillero impuesto por el FMLN.

Las modalidades tácticas aplicadas por el ejército para evitar golpes militares le plantean una contradicción entre el problema de cuidar a sus hombres o proteger su base de sustentación económica y política. En toda esta situación, el FMLN tiene además la ventaja de que al ejército se le vuelve imposible romper los vínculos de las guerrillas con las masas. Por ello, cosas que hace 10 años hubieran parecido imposibles, hoy resultan hechos cotidianos. Por ejemplo, que las patrullas guerrilleras con armas largas penetren a los barrios periféricos de la capital, que unidades mayores del FMLN puedan alcanzar objetivos en el volcán de San Salvador o en la periferia de Santa Ana, o que los guerrilleros ataquen el penal de Mariona, en San Salvador, y liberen presos sin mayor problema.

El ejército no ha progresado en lo más mínimo en los aspectos políticos de su plan contrainsurgente. La principal razón de este fracaso reside en la incapacidad estratégica de hacer concesiones importantes a las masas; todo lo contrario, las siguen reprimiendo. Su capacidad de concesión no va más allá de la ejecución de acciones de reparto de víveres que no son otra cosa que una desgraciada caridad que no mitiga el hambre de un día ni hace olvidar la represión de 50 años. Estas acciones sólo confirman el profundo desprecio que sienten por un pueblo al cual creen incapaz de pensar y luchar consciente de sus intereses y cuyos principios y valores humanos son muy superiores a los que promueve el sistema en que vivimos. Esto es lo que está, en gran medida, en la base del fracaso de la formación de la defensa civil y es lo que provoca que las tácticas irregulares de las llamadas PRAL, o grupos de operaciones especiales u otros recursos recomendados por la CIA, resulten planteamientos de poca significación militar estratégica, ya que no tienen posibilidades ni capacidad de realizar ningún trabajo político significativo entre la población.

La guerra aérea se está usando cada vez más con sentido psicológico, sin blancos precisos, buscando resultados en base a un volumen de fuego indiscriminado, el cual al afectar a las masas, acrecienta el descontento y profundiza los problemas políticos internos o internacionales del plan contrainsurgente. Los bombardeos masivos en el cerro de Guazapa, sumados a los desalojos de población, dada la cercanía de la capital, exhiben la impotencia de un plan militar que no tiene más alternativa que ir en contra de la lógica política, alimentando su propia derrota.

El uso del arma aérea y de la artillería en un país de 244 habitantes por kilómetro cuadrado constituye en sí una acción genocida y una muestra de impotencia. La densidad de población niega toda posibilidad para justificar el uso de estas armas; la

llamada precisión cirujana con la que los asesores pretenden justificar su uso es absurda. La guerra aérea y la artillería han provocado muchísimas más bajas y destrucción a la población civil que al FMLN.

Se ha dicho que la guerra aérea obligó al FMLN a dispersarse, pero éste es un falso punto de partida para analizar la estrategia del FMLN. Militar y políticamente hubiera sido un grave error del FMLN permanecer librando la guerra sólo en sus frentes tradicionales. La guerra aérea llegó tarde. Ya habíamos roto las líneas de defensa del área vital. Los territorios bajo control y en disputa eran ya demasiado grandes. La guerra aérea no podrá ser utilizada en las periferias de las ciudades ni en las áreas vitales sin que suponga elevados costos políticos los cuales acelerarán la participación de las masas en la guerra y desprestigiarán y debilitarán mucho más al ejército. El incremento de la guerra aérea sólo prueba que están perdiendo la guerra en tierra. En sentido más estrictamente táctico, el FMLN ha logrado mantener sus acciones sin que la guerra aérea pudiera evitarlo al haber desarrollado la capacidad de concentración y dispersión de unidades mayores en ataques de mayor velocidad de definición. Para el FMLN derrotar la guerra aérea no significa la destrucción ni el aniquilamiento total de los medios aéreos enemigos, sino lograr que éstos se vuelvan inefectivos para contener el avance de las fuerzas del FMLN en el terreno.

Es tan crítica la situación del ejército que sus mandos más optimistas hacen descansar las perspectivas de mantenerse a flote en la incondicional ayuda de los norteamericanos, dándole a dicha ayuda un papel máximo que realmente no tiene. Ese sentimiento de sobrevaloración del papel de la ayuda se va a diluir en la medida en que se profundice la crisis y está vinculado a la corrupción y al papel que juega la ayuda en el mantenimiento y enriquecimiento de sectores sociales vinculados al gobierno, a la empresa privada y al ejército. La ayuda norteamericana, aún cuando ya no sirve para ganar la guerra, siempre será buena para enriquecerse. Por ejemplo, a los sectores del capital financiero ligados a FUSADES no les importa que haya o no haya reactivación económica o que se pierda o se gane la guerra. Lo importante para ellos es que están recibiendo muchos millones y que esa posibilidad no la habían tenido nunca. Igual situación se presenta dentro del ejército y del aparato de gobierno.

Los norteamericanos tienen fría y estructuralmente considerada la corrupción como un componente del plan contrainsurgente. La corrupción busca asegurar la fidelidad de la estructura de poder en el gobierno, el ejército y los sectores de la empresa privada y juega también un importante papel en el sostenimiento de la moral del ejército, ya que es el incentivo principal para que la estructura de mandos acepte continuar en la guerra. La corrupción es alimentada por los norteamericanos a través de un sin fin de proyectos y planes que, al ejecutarse, generan grandes burocracias, estructuras y obras sin sentido las cuales distribuyen un elevado porcentaje de fondos entre quienes administran los proyectos. Esta situación va generando todo un sector social parasitario. La misma jerarquía de la democracia cristiana se ha convertido prácticamente en un nuevo grupo económico de poder con importantes intereses en el sector financiero e industrial.

Esto explica por qué, a pesar de la guerra y de la crisis económica, existe un florecimiento artificial de comercio suntuario, de centros de diversión (zona rosa), de turismo y de otras actividades que contrastan con la crisis y el enorme empobrecimiento del pueblo.

El proyecto de reforma urbana es un típico ejemplo de la corrupción estructural, en el cual lo fundamental es la ejecución de obras para justificar préstamos. Existen decenas de proyectos similares, vinculados a los diferentes ministerios, los cuales son sólo mecanismos de distribución de la corrupción proveniente de la ayuda. En Vietnam, Saigón vivió también un florecimiento artificial. Se demolían calles para hacer otras calles iguales, o se levantaban paredes para luego demolerlas y hacer otras iguales.

Pero, independientemente de estos elementos, es conveniente analizar si es objetivo decir que la ayuda y los norteamericanos son capaces de impedir el colapso del ejército y la caída del gobierno. Si revisamos con detenimiento los planteamientos políticos y militares que hemos desarrollado a lo largo de este documento y los analizamos en el marco de todo lo que esta problemática representa para el plan contrainsurgente, veremos que se han establecido círculos viciosos y dilemas irresolubles para los norteamericanos.

El papel de la ayuda no puede ser absoluto. Guarda una correspondencia directa con las dimensiones del Estado salvadoreño para hacerla efectiva en un plan de guerra. Por mucha ayuda que envíen los norteamericanos siempre hay un porcentaje financiero que debe salir del Estado. La capacidad de endeudamiento tiene un límite. No debemos olvidar que la ayuda se mueve en el marco de relaciones entre estados capitalistas y que esto implica compromisos limitados para ambas partes. La devaluación del colón es ya un resultado que va en sentido inverso al supuesto papel de la ayuda.

Es estructuralmente imposible, por una serie de complicaciones económicas y políticas, que la ayuda económica y militar de Estados Unidos pueda asumir el mantenimiento total de la guerra y del Estado salvadoreño. Aquí se abre un primer dilema: al aumentar los volúmenes de guerra, aumenta la exigencia de ayuda. Pero esto también significa un aumento en las exigencias financieras del Estado, problema que ya está planteado y que nos llama a proponer como reflexión una interrogante: ¿cuánto más puede destinar el Estado salvadoreño a la guerra?

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

Destinar el 40 por ciento del presupuesto nacional a la guerra está acercando al Estado al colapso financiero. Este planteamiento, un tanto dramático, no es invención nuestra. Duarte y otros funcionarios demócratas cristianos lo reconocieron explícitamente cuando explicaron las razones del llamado paquete económico. El tener que destinar más fondos a la guerra los obliga a tomar medidas que aumentan el descontento popular, abonando, por lo tanto, su propia derrota. Aquí se abre ya un pequeño círculo vicioso: la guerra les exige más fondos y esos fondos obligan a medidas económicas anti-populares. El descontento por las medidas agrava la crisis y profundiza la guerra y si se profundiza la guerra, se necesitarán más fondos y más ayuda y habrá, por lo tanto, más descontento. El tiempo que les tome enredarse cada vez más en este círculo es, entre otros factores, el tiempo que le tome al FMLN obtener la victoria.

Pero no sólo está establecido este círculo vicioso, sino que hay otros. Por ejemplo, la reactivación económica es esencial para lograr algunos avances en los componentes políticos de su plan. Es decir, la reactivación económica es esencial para ganar la guerra, pero para reactivar la economía necesitan ganar la guerra. Este es otro problema que tampoco lo resuelve la ayuda, ya que por muy voluminosa que ésta sea no puede suplantar el papel de la estructura económica salvadoreña.

La extensión de la guerra a todo el territorio y la profundización de la desestabilización van a exigir al régimen cada vez más tropa y, por lo tanto, más dinero para mántenerla. Aquí cabe preguntarse si la capacidad de crecimiento del ejército es ilimitada o, más bien, si este crecimiento está limitado por las capacidades del Estado salvadoreño, por la economía nacional y por las condiciones políticas. El ejército aún no ha resuelto los problemas de su plan de crecimiento anterior, el cual supuestamente era suficiente para contener y derrotar al FMLN y, sin embargo, ya están planteadas las necesidades de más tropas y mandos.

Más tropas quiere decir más botas, más uniformes, más salarios, más cuarteles, más combustible, mayores estructuras de seguridad, etc. Es decir, significa más fondos y no todos pueden venir del exterior. Actualmente el presupuesto de defensa representa el 40 por ciento del presupuesto nacional. De este 40 por ciento, el 80 por ciento está destinado a salarios de oficiales y tropas. La ayuda militar norteamericana cubre armas, munición y algunas vituallas, pero los salarios deben salir del Estado salvadoreño. Los nuevos batallones se han ubicado en las instalaciones físicas de cooperativas, cines, zonas industriales, escuelas, etc. El desarrollo de la guerra les ha impuesto cada vez más estructuras vinculadas al aparato del Estado (funeraria, seguros, centro de rehabilitación, complejo hospitalario, talleres de mantenimiento de los medios, etc.). El financiamiento de todo este aparato ha creado ya complicaciones tales que ha obligado a sacrificar servicios sociales elementales de la población, los cuales siempre han sido insuficientes. Por ejemplo, mientras el Hospital Militar se moderniza y se abastece completamente, los hospitales públicos están sin medicinas y viviendo una crítica situación con lo cual se agravan los problemas de salud del pueblo y, por lo tanto, también se abona el descontento.

Un proceso de agotamiento de las capacidades físicas de crecimiento del ejército está en desarrollo y este proceso no puede detenerse con la ayuda, a menos que los norteamericanos se decidan por mayores niveles de intervención, estableciendo sus propias bases militares y centros de entrenamiento dentro del territorio, y por usar su fuerza aérea y sus tropas en combate. Es decir, la intervención directa. Pero ésto lo tienen que analizar en el marco de la situación internacional, de la situación interna de Estados Unidos y, en alguna medida, tomando en cuenta la ventaja que representa para el FMLN el poder desgastar en mayor profundidad la política de Reagan, obligado a hacer uso de su último cartucho.

La guerra aérea también plantea dificultades en el orden físico-financiero. Esta modalidad de la guerra no fue hecha para estados ni países pobres como el nuestro. En la actualidad, el ejército cuenta con unos 70 medios que requieren de una compleja y costosa estructura de mantenimiento. Cabe entonces preguntarse: ¿cuántos helicópteros más puede tener? ¿Cuántos batallones helitransportados puede formar? ¿Cuántos pilotos? O ¿cuántas bases aéreas puede tener?

El curso de la guerra establece que harán uso de más medios aéreos aunque dichas armas serán aún más inefectivas en los nuevos teatros de guerra y además profundizarán el descontento popular. La capacidad de asimilación de los medios aéreos tiene límites físicos; por mucho que los norteamericanos quieran incrementar esta modalidad enfrentarán problemas físicos y técnicos que sólo son solubles si ellos lo asumen de forma directa. Aquí se repiten las implicaciones políticas de las que ya hablamos.

En general, la guerra ha comenzado a adquirir un volumen tal que sólo podrá ser manejada si los norteamericanos asumen un papel más directo en todos sus terrenos. El pronóstico es de más desgaste para sus fuerzas vivas, más golpes estratégicos del FMLN, más sabotaje en el área vital, más zonas de operación, más descontento e incremento de la movilización popular. Deberán enfrentar esta situación con un Estado en crisis económica que no permite aumentar las fuerzas y en medio de una crisis política que se irá aproximando cada vez más a un vacío de poder. Todo ésto no lo resuelve la ayuda.

Hasta ahora hemos analizado cómo la ayuda no es omnipotente en el terreno material. Pero hay

algo mucho más serio aún: la ayuda y la intervención norteamericana no solamente son incapaces de resolver los problemas humanos, morales y políticos, sino que además contribuyen a complicarlos. En la medida en que el plan militar contrainsurgente es inefectivo, en la medida en que el ejército debe cargar con miles de bajas en una guerra en la cual sus fuerzas aparecen impotentes e inútiles, se va generalizando un sentimiento que en su momento hará crisis: "no es posible estar librando una guerra bajo la dirección de los norteamericanos, por los intereses de los norteamericanos, pero donde los salvadoreños ponemos los muertos".

Aún cuando todavía no hay intervención directa con tropas norteamericanas en El Salvador, los 2 mil millones de dólares de la ayuda y la pérdida de nuestra independencia, producto del total sometimiento del gobierno de Duarte a las decisiones del gobierno de Reagan, ya están generando un sentimiento nacional sobre la necesidad de rescatar nuestra soberanía. Este sentimiento se da en los partidos políticos, en sectores de la empresa privada y a no muy largo plazo, también se hará presente en las fuerzas armadas.

A medida que avanza el conflicto se debilita la estructura de poder por la falta de credibilidad en el triunfo del ejército y en que los norteamericanos puedan solventarlo todo. Por mucho que el gobierno de Reagan presione a los representantes de su política en El Salvador para que resistan, éstos quedarán aislados y no podrán resistir.

De cara a las masas populares, la situación para el proyecto norteamericano se presenta mucho más difícil. A medida que avanza la guerra, se profundiza la crisis y las masas perciben la debilidad del enemigo y la fortaleza del FMLN. Esto las motiva cada vez más a organizarse, exigir y desafiar. Por eso mismo, Duarte cometió un error de apreciación al convocar a la reunión de La Palma. Para el pueblo ese hecho constituyó una prueba de la fuerza del FMLN y de la impotencia del ejército. Es decir, lo contrario de lo que esperaba Duarte. Para contener esta situación se enfrentará al dilema de la represión, pero si lo hace, está claro que acelerará y profundizará la lucha popular. En síntesis, cada día que pasa sin que el ejército pueda vencer al FMLN, es un día menos en el camino de los revolucionarios salvadoreños hacia la victoria.

El general Westmoreland, jefe de las fuerzas norteamericanas durante la guerra de Vietnam, solía evaluar los supuestos progresos en la guerra haciendo sumas de los hombres y medios que componían su fuerza y la del ejército sudvietnamita. Este mismo general, al final de la guerra luego de la derrota, afirmó que sus tropas jamás perdieron militarmente una batalla, pero tuvo que reconocer que los vietnamitas le ganaron la guerra.

Los oficiales de la guardia somocista hacían una afirmación similar, señalando que sus fuerzas élites quedaron intactas y que nunca pudieron derrotarlos militarmente, pero también tuvieron que aceptar que el Frente Sandinista les ganó la guerra. La guerra popular como estrategia de los revolucionarios está muy por encima de la capacidad de comprensión del bando enemigo, porque se fundamenta en el apoyo del pueblo y en la capacidad de los revolucionarios de combinar todas las formas de lucha.

¿El sabotaje, ventaja o desventaja?

En otras partes de este análisis hemos demostrado el valor estratégico del sabotaje para debilitar la economía de guerra y para quebrar del todo el proyecto económico del plan contrainsurgente. Sin embargo, el gobierno, el ejército y los sectores contrarios al FMLN intentan explotar las consecuencias negativas del sabotaje para la población. Según ellos el sabotaje contribuye a reducir la simpatía hacia la guerrilla. Veamos con más detenimiento si existe esta desventaja o si más bien se trata de una visión superficial de la complejidad de factores que determinan la conciencia y la conducta del pueblo dentro de la guerra.

El gobierno al elaborar su plan propagandístico debe partir de una realidad adversa a sus intereses, al tener que reconocer que la mayoría del pueblo simpatiza y ve positivamente los valores y las razones que mueven a la guerrilla. La propaganda gubernamental y las declaraciones oficiales se esfuerzan por probar que ya no hay razones para luchar porque ya se produjo la revolución, o por lo menos, la transformación esperada. Por otro lado, tratan de probar también que el FMLN ha desnaturalizado sus valores y las razones de su lucha. Estos planteamientos obedecen a una situación de impotencia; ellos mismos aceptan implícitamente que cuando existen razones para luchar es justo hacerlo. El régimen está claro que el nivel de conciencia política del pueblo rechaza el discurso reaccionario y anticomunista. La misma democracia cristiana pretende identificarse como partido de izquierda cuando le conviene.

Por ahora, el sabotaje se ha convertido en el componente principal de la llamada guerra psicológica del alto mando, quien se propone la difícil tarea de aprovecharlo para reducir la simpatía hacia la guerrilla, pero sin cumplir las demandas estratégicas del pueblo, sin detener la represión y sin ni siquiera poder hacer concesiones a la plataforma reivindicativa del movimiento popular. Por otro lado, intenta contrarrestar el odio histórico del pueblo contra la Fuerza Armada repartiendo víveres y haciendo obras sin ninguna trascendencia.

Mientras no haya capacidad de concesión estratégica a las masas será practicamente imposible que el plan contrainsurgente pueda disputárselas al FMLN. Las limitadas reformas que se llevaron adelante, en tanto fueron concebidas como parte de un plan

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

contrainsurgente y no como transformaciones económicas y sociales reales no han traído beneficios, sino dificultades. La "nacionalización" de la banca, el INCAFE e incluso la reforma agraria, más que para crear beneficios sociales, han servido para fortalecer la economía del Estado y ampliar su capacidad para pagar los gastos de la guerra.

Es interesante señalar las diferencias económicas en El Salvador y en Nicaragua. En El Salvador existe una guerra popular revolucionaria, y en el segundo, una guerra de agresión contrarrevolucionaria por parte de Estados Unidos. En El Salvador la economía tiene dos orientaciones básicas, mantener la guerra y mantener el sector privado capitalista (plan de reactivación), ambas cosas a costa de sacrificar los elementos y siempre insuficientes servicios sociales de educación y salud de la población. Nicaragua, por su parte, orienta su economía a sostener la guerra, pero al mismo tiempo fortalece la propiedad social y trata de hacer todo lo que puede para avanzar en el campo de la salud y la educación. Nicaragua a pesar de la guerra tiene más hospitales, más clínicas, más escuelas y menos analfabetismo que antes. Contrariamente en El Salvador la guerra está aumentando el número de ricos, profundizando la miseria y el analfabetismo. Es dramático el cuadro de la educación y la salud, las cuales han desmejorado enormemente en relación a los años anteriores; sin embargo, el gobierno se llama a sí mismo democrático, reformista y hasta revolucionario.

Por eso, mientras en El Salvador se trata de formar la defensa civil, base de la represión y amenaza a los jóvenes campesinos; en Nicaragua la milicia se forma sin mayor problema ya que detrás de cada cooperativa que se constituye y detrás de cada entrega de tierra de la reforma agraria, también se entregan fusiles para defender las tierras, las clínicas, los hospitales y las escuelas.

Esto explica por qué las bandas somocistas contrarrevolucionarias que paga Reagan para hacer la guerra a Nicaragua asesinan a maestros alfabetizadores, cooperativistas, empleados del Estado, trabajadores de salud, etc., a la par que destruyen escuelas, clínicas y las cooperativas de la reforma agraria. El FMLN, sin embargo, no sólo respeta las escuelas, las clínicas y las cooperativas, sino que alienta al pueblo a exigírselas al gobierno.

Es muy simplista pensar que un pueblo con tanta tradición de lucha como el nuestro va a determinar su conciencia y conducta frente a la guerra solamente por las complicaciones que genera luchar y no por los factores estructurales que determinan la necesidad de luchar. Aún en los sectores con mayor atraso político, el ejército siempre tiene un saldo muy alto en su contra por la represión que necesita mantener dentro de su plan de guerra.

Al hablar de ventaja o desventaja se debe analizar qué incide más en la conducta del pueblo y en la comprensión que pueda tener de la guerra y el sabotaje. Hay que preguntarse qué le impacta más, si el sabotaje o el paquete económico, los bajos salarios, la imposibilidad de los cooperativistas de pagar la deuda agraria, los bombardeos, los desalojos masivos, los escuadrones de la muerte, la quema de los cultivos de subsistencia, la represión y las operaciones terroristas, el reclutamiento forzoso.

Es evidente entonces que la conducta del pueblo se mueve entre un FMLN que promueve, organiza, apoya y se identifica totalmente con las banderas y las luchas del pueblo, y un ejército y un gobierno que con la justificación de que hay guerra, reprimen para tratar de imponer una disciplina social y exigen austeridad, mayores sacrificios y más miseria a las clases trabajadoras.

Mientras tanto, con la ayuda que envía Estados Unidos para la guerra se profundiza la corrupción y se enriquecen los mandos del ejército, los funcionarios del gobierno y los sectores de la empresa privada. Son todos estos elementos los que, en definitiva, mueven la simpatía o el rechazo a los bandos en guerra por parte del pueblo. Ellos determinan si es o no justo luchar y si se deben o no aceptar las consecuencias de la lucha.

El sabotaje del FMLN ataca renglones estratégicos de la economía, la electricidad que guarda relación directa con la industria, el comercio y todo el aparato productivo de las áreas vitales; los productos de exportación que generan divisas (café, algodón, caña de azúcar); el sistema de telecomunicaciones que tiene valor militar y económico; el sistema ferroviario y el transporte. Ese es el sabotaje que realiza el FMLN y es evidente que su efecto ataca directamente a la estructura económica del sistema capitalista oligárquico.

El ejército también hace sabotaje tratando de causar daños indirectos a las fuerzas del FMLN, atacando directamente la economía de subsistencia de las masas más pobres. En sus incursiones los soldados queman los cultivos (maizales y maicilleras), roban ganado y animales de crianza, destruyen las casas de la población civil, destruyen y cierran escuelas y clínicas, bloquean el pequeño comercio y los abastecimientos (víveres y medicina) de la población civil, prohíben el paso de insumos y de semillas para cultivos, etc. En síntesis, el sabotaje del FMLN se orienta al sistema económico, mientras que el sabotaje del ejército se orienta a la economía de subsistencia de las masas campesinas más pobres.

El sabotaje del FMLN no busca daño intencionado ni directo a la población, como sí lo buscan las acciones del ejército. Por ejemplo, en los paros de transporte, el movimiento de los autobuses de pasajeros es lo menos importante y se integra a los paros porque la efectividad del sabotaje exige que éstos sean totales, pero el objetivo del FMLN es afectar la distribución de mercancías, el tráfico comercial internacional, el transporte de combustible, el transporte de los productos de exportación

En síntesis, todo lo que dañe el sistema económico en sus renglones estratégicos.

En esto, los paros son altamente efectivos. Prueba de ello es que en El Salvador, en un país tan pequeño, está por abrirse una línea marítima para transportar combustible y mercaderías al oriente del país (un trayecto de menos de 200 kilómetros). Esto a pesar de contar con un ejército de más de 50 mil efectivos.

Por otro lado, las impotentes acciones del ejército causan daños directos e intencionados a las masas más pobres, aumentando la masa de refugiados y desplazados, quienes pasan de medio millón. Estas acciones que muestran impotencia e irracionalidad, buscan supuestamente desestabilizar y dañar indirectamente al FMLN por los medios más ilógicos y absurdos que se puedan imaginar. Por ejemplo, la lógica de quemar y destruir casas de campesinos es evitar que las utilicen los guerrilleros. Esta irracional política ha significado la destrucción de cientos de miles de viviendas campesinas, abarcando municipios enteros. La quema de cultivos, el bloqueo de abastecimientos y medicinas y el cierre de pequeños comercios, pretende que la guerrilla se quede sin comida y sin víveres, sin importarles que en una determinada zona haya quizás un guerrillero por quién sabe cada cuántos centenares de miles de habitantes. Esto significa que los guerrilleros siempre resolverán sus problemas, pero no así la población civil, lo cual se ha visto forzada a desplazarse y a caer en la más profunda miseria. La guerrilla no necesita casas y es absurdo creer que en un país tan pequeño se puede evitar el desplazamiento de abastecimientos para una fuerza guerrillera. No lo pudieron controlar ni siquiera cuando existían puestos permanentes del ejército en todos los pueblos y el FMLN estaba menos desarrollado y la guerra no tenía dimensión nacional. La batalla del ejército es más contra el agua que contra el pez.

Tal como el ejército hace la guerra, profundiza el odio de las masas hacia la Fuerza Armada. Las dificultades indirectas y no intencionadas que sufre el pueblo por el sabotaje son mínimas en comparación con el volumen de daños directos e intencionales provocados por las acciones del ejército en contra de su derecho a sobrevivir, convirtiendo la guerra en un enfrentamiento directo de la Fuerza Armada con el pueblo.

La actividad del FMLN en una zona, al respetar la economía de subsistencia y defender los intereses de los trabajadores produce algunos beneficios. El FMLN respeta a los pequeños propietarios, a los cooperativistas, a los campesinos pobres y alienta a todo el pueblo a exigir la apertura de las escuelas y las clínicas y el respeto a sus derechos. El FMLN lucha por imponer mejores salarios, permite el libre uso de las tierras por las cuales antes los campesinos más pobres debían pagar, y los pequeños productores y los pequeños comerciantes se ven liberados de los impuestos del Estado.

El cinismo de la propaganda del gobierno juega con argumentos tales como el de que a los ricos no les afecta el sabotaje porque siempre resuelven sus problemas. Este cínico argumento pasa por alto el carácter injusto de las diferencias de clases y trata de jugar con la conciencia antiburguesa de las clases populares. La guerra afecta de distintas formas a los diferentes sectores sociales. Es claro que para las clases dominantes, en tanto detentadoras del poder, el problema de los efectos de la guerra no se plantea en términos del reclutamiento forzoso de sus hijos, ni del sufrimiento de los bombardeos, ni de la cercanía de los combates ni de los efectos de un paro o de un apagón. El problema de las clases dominantes es que el sistema económico social que les da vida y poder, está cada vez más deteriorado por el avance de la guerra.

Es falso decir que las clases dominantes no sufren la guerra. La guerra ha significado para la burguesía el buscar refugio en Miami, reducción de sus movimientos dentro del país, necesidad de utilizar vehículos blindados y convertir sus casas en fortalezas, imposibilidad de visitar sus fincas y propiedades las cuales ahora están en manos de mandadores y colonos, quienes por cierto pasan así más tranquilos. La guerra y el avance político y militar del FMLN han provocado el que los norteamericanos los hayan forzado a un juego político que ahora los obliga a salir a las calles a protestar con sus sirvientas, golpeando una cacerola que nunca han usado en su vida, con lentes para el sol y ropa importada.

El avance de la guerra y los efectos del sabotaje, y en general, toda la lucha popular, han debilitado el poder de las clases dominantes. Cada día que pasa, la guerra llega de manera más directa a los grupos de poder económico, político y militar y no sólo bajo la forma de apagones. El sabotaje como manifestación de lucha es consecuencia y no causa. El sabotaje no origina la pobreza, la pobreza viene de la explotación de clases y la explotación de clases origina la necesidad de luchar.

Las huelgas de los trabajadores se mueven en este mismo terreno y son atacadas por la propaganda gubernamental con la misma lógica con la que ataca el sabotaje: "con las huelgas el más afectado es el pueblo, por lo tanto, es mejor no hacer huelgas". La idea central de la llamada guerra psicológica juega con el planteamiento siguiente: "luchar daña a los pobres, entonces es mejor no luchar y dejar las cosas como están".

Si ideas como éstas hubieran tenido algún valor en la historia, todavía estuviéramos en el esclavismo, no habría habido independencias y los trabajadores nunca hubieran logrado hacer valer derechos tan elementales como la conquista histórica de la jornada de 8 horas. Cuando los pueblos comprenden que tienen derechos y necesitan hacerlos valer, asumen las consecuencias de la lucha. El problema es si los pue-

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

blos han adquirido conciencia histórica de sus reivindicaciones y de sus derechos. En el caso del pueblo salvadoreño ésto es evidente. El mismo régimen trata de engañar y confundir, asumiendo banderas y planteamientos reformistas con vocabulario "antioligárquico".

Como los factores estructurales son los dominantes en la conciencia del pueblo, éste está dispuesto no sólo a tolerar, sino también a participar de toda actividad que considere parte de una lucha por sus intereses, a sabiendas de que ello le trae consecuencias. Y si no, ¿cómo se explica que 60 mil personas estén dispuestas a salir a las calles a exigir al régimen a pocos años de que el ejército asesinara a otros 50 mil porque hacían lo mismo? Resulta evidente, entonces, que las consecuencias de un paro de transporte o de un apagón son insignificantes frente a lo que representa jugarse la vida en las calles exigiendo sus derechos ante un gobierno genocida.

El problema de la ventaja o desventaja del sabotaje para el FMLN desde el punto de vista del apoyo popular se mueve en el contexto de la contradicción, sumisión o rebelión de la conciencia popular y es en ese plano donde intenta actuar la llamada guerra psicológica. El gobierno trata de promover una conciencia sumisa imponiendo el terror, engañando con supuestos cambios, señalando que la lucha trae consecuencias para quienes participan en ella y planteando la imposibilidad de la victoria. Todo esto se mueve en la superficialidad sin afectar los factores que condicionan la conciencia de las masas y como hemos señalado anteriormente, son muy insignificantes los sectores que puedan tener una conducta sumisa.

El FMLN se apoya en los factores estructurales para promover una conciencia de rebeldía y tiene a su favor la existencia de una plataforma de reivindicaciones inmediatas y estratégicas populares no satisfecha; la existencia de represión permanente y la existencia de un odio histórico del pueblo hacia la Fuerza Armada, cosa prácticamente irresoluble. Por otro lado, el FMLN al mantenerse acumulando fuerzas y ser capaz de profundizar y extender la guerra, mantiene vigente la perspectiva de la victoria y esto constituye un elemento decisivo para el ánimo de rebelión de las masas.

Los esfuerzos de los norteamericanos por cambiar la imagen del ejército y tratar de que éste se identifique con el pueblo son inútiles y absurdos; van en contra de la naturaleza misma del ejército y no tienen ningún asidero en el proyecto económico y político del plan contrainsurgente, que no sea repartir maíz y frijoles a los mismos a quienes bombardea y reprime. Sería una estupidez pensar que en el marco de una guerra popular, que obliga a la conducta más represiva de toda su historia, la Fuerza Armada pueda resolver el problema del odio histórico del pueblo.

Su intento de captar base o ganar adeptos, se mueve paralelo a la capacidad de imponer el terror y de someter a las masas a su autoridad. Esto es sumamente remoto porque, a pesar de los 50 mil muertos de los útimos años, continúa la protesta popular y se extiende la guerra. Prueba palpable de esto último es que si no hubiera existido el FMLN y no se hubiera profundizado la guerra, la represión desatada en los últimos años habría impuesto a las masas quién sabe cuántas décadas de silencio y terror, tal comó sucedió en 1932, y no hubieran necesitado ni reforma, ni PDC, ni Duarte, ya que cualquier coronel hubiera servido igual. En la medida en que avance la guerra y sea más clara la perspectiva de la victoria, irá en aumento la disposición popular para luchar por sus reivindicaciones y para participar en la guerra junto al FMLN.

Otro de los planteamientos que maneja el ejército sobre el sabotaje es que el FMLN ha recurrido a él por incapacidad militar y que las operaciones de sabotaje a la energía y otras, son militarmente más sencillas. Es obvio para todo el mundo, y ellos mismos lo reconocen, que el sabotaje tiene un peso estratégico en la derrota del proyecto económico del gobierno y en el debilitamiento de la economía de guerra. Por lo tanto, no está en discusión la capacidad del FMLN, sino la incapacidad del ejército para defender su base de sustentación económico-política, su razón de ser, ya que la guerra no es un simple juego de caballeros medievales.

El ejército no sólo es incapaz de defender los postes, sino que también poco puede defender los beneficios cafetaleros, algodoneros, las fincas, los ferrocarriles y otros objetivos importantes que cuentan con seguridad militar, aniquilada o burlada por el FMLN. Sin embargo, hay que reconocer que muchas operaciones de sabotaje son más sencillas militarmente, pero su masificación tiene valor de participación popular, por ejemplo, la chapoda o quema de un cafetal o de un algodonal, el derribamiento masivo de postes sin utilizar explosivos, las barricadas o las zanjas en las carreteras no pueden hacerse sin la participación directa del pueblo; implica decenas y hasta centenares de participantes, muchos de los cuales no han combatido todavía y no tienen un arma o bien deben utilizar armas populares. Es cierto que muchos de los combatientes que hacen el sabotaje tienen por ahora poca experiencia militar, pero ésto es sólo parte de un proceso de integración y preparación combativa. El ejército debe recordar que los jóvenes inexpertos que hace unos años hacían barricadas y se oponían a sus fuerzas con escopetas y armas caseras son quienes hoy les toman cuarteles y conducen una guerra, la cual ha obligado a los norteamericanos al nivel de intervención más grande en la historia de América Latina. Para formar sus fuerzas, el FMLN no necesitó de grandes academias militares ni de millonarias ayudas, la práctica ha sido nuestra principal escuela.

Para la Fuerza Armada un soldado o un oficial

se prepara a fuerza de golpes, maltratos, humillaciones y un trato indigno que garantice una obediencia irracional y el desarrollo de una desmedida ambición de poder y privilegio, ésto último fundamentalmente en los oficiales. Razonar y debatir va en contra de la preparación del ejército; ésto los obliga a no poder contar con más gente que la que proporciona el reclutamiento forzado de miles de jóvenes, quienes se niegan a permanecer en el ejército más allá del tiempo de servicio y la inmensa mayoría deserta antes de terminarlo. Para el FMLN la formación de un combatiente no es únicamente un problema militar, sino un problema fundamentalmente ideológico, y, es por ello que en el crecimiento de nuestras fuerzas tiene valor estratégico la gradualidad en la participación en acciones combativas, ya que ésto permite ir alcanzando niveles superiores de efectividad y conciencia.

El sentido que el ejército da al sabotaje en su guerra psicológica intenta darle también al uso de las minas y armamentos popular por parte del FMLN, alegando que afecta a la población civil y no al ejército. Las armas populares se están convirtiendo en un grave e irresoluble problema militar para el ejército tal como lo fue para los norteamericanos en la guerra de Vietnam. No han encontrado otra solución a este problema que no sea el de abrir una campaña propagandística. El FMLN no puede hacer uso indiscriminado de armas como las minas porque esto afectaría su propia sobrevivencia entre el pueblo. El ejército tiene una política de daño intencional y directo a la población civil y cuando se siente desesperado no vacila en hacer uso indiscriminado de armas, las cuales, usadas contra la población civil, son de exterminio y destrucción masiva. Los habitantes de la capital han sido testigos de cómo la fuerza aérea bombardea y ametralla con helicópteros las faldas del volcán de San Salvador, en la propia periferia de la capital, donde viven decenas de miles de personas, tal como sucedió el 1 de abril de 1986.

Basado en esa misma lógica el ejército ha colocado millares de minas de fabricación norteamericana (M-14 y M-18) en las cercanías de sus posiciones (cuarteles o infraestructura), las cuales mantienen en áreas densamente pobladas, provocando frecuentemente víctimas de la población civil. Estas víctimas luego son atribuidas al FMLN y son usadas en sus campañas propagandísticas. El FMLN utiliza las minas y el armamento popular en otro tipo de áreas y con planteamientos tácticos que garantizan la movilidad propia y la seguridad de la población civil; el FMLN avisa previamente y hace labor de organización entre el pueblo para evitar los accidentes. Y lo más importante de todo, el pueblo mismo participa en la fabricación y utilización de estas armas, es decir, el pueblo mismo está haciendo la guerra.

El potencial humano que el FMLN está comprometiendo en la guerra y concretamente en el sabotaje y el uso de las armas populares no sólo tiene un efecto estratégico en el desgaste y la desestabilización, sino que constituye una sólida base para su crecimiento estratégico a corto y mediano plazo.

El Salvador: ¿conflicto este-oeste o guerra popular?

Entre los argumentos más usuales para justificar los niveles de ayuda e intervención norteamericana en El Salvador, se encuentra el de que la actual guerra es producto del llamado expansionismo soviético; así se establece la relación Unión Soviética-Cuba-Nicaragua-FMLN. En este mismo terreno están también los planteamientos que sostienen que el conflicto salvadoreño es una manifestación del conflicto este-oeste, con lo cual se pretende desnaturalizar el carácter popular y de liberación nacional que tiene la guerra en El Salvador. Consecuentemente se plantea entonces, que la continuidad de la guerra no tiene sentido para el pueblo.

En el caso concreto de El Salvador y de Centroamérica, éste es el principal argumento con el cual el gobierno de Reagan presiona al congreso de Estados Unidos para lograr la aprobación de la ayuda económica y militar para el gobierno de Duarte. En el caso de una intervención directa de tropas norteamericanas en El Salvador y en Centroamérica usarán este planteamiento como justificación principal. Por ello, es importante analizarlos con detenimiento.

Está ya totalmente claro y no necesitamos detenernos demasiado para probarlo, el hecho de que el gobierno de Duarte se sostiene y sobrevive gracias al gobierno de Reagan y que aquél representa los intereses de la política de seguridad nacional, trazada por el gobierno de Estados Unidos. El problema entonces es si el FMLN y la guerra popular en El Salvador dependen y pueden explicarse como parte del conflicto este-oeste. En el orden de los recursos y medios materiales es absurdo explicar la guerra a partir de la ayuda externa. El que los revolucionarios salvadoreños también planteen ésto no significa que renunciemos a nuestro derecho a recibir apoyo material de quien nos lo quiera y pueda dar, ya que estamos enfrentados a un gobierno que recibe más de 2 millones de dólares diarios de Estados Unidos, quien conduce y abastece al ejército salvadoreño en la guerra contra el FMLN.

Ninguna cantidad de abastecimiento material que el FMLN pueda conseguir explica la dimensión del conflicto. Estaría en una proporción, quizás, de entre 10 y 27 mil contra uno en relación a la ayuda que recibe el gobierno. La inexistencia de fronteras directas por donde los revolucionarios salvadoreños puedan ser abastecidos imposibilita hablar de un apoyo significativo. Por ello ha sido inútil todo el esfuerzo de los norteamericanos por probar el supuesto abastecimiento a partir de datos como la foto de 4 burros cargados con munición, como lo

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

quiso hacer el general Paul Gorman. Si eso fuera cierto, cómo es posible que 4 burros con munición estén obligando a Estados Unidos a comprometerse e intervenir en El Salvador en las dimensiones actuales. En El Salvador existe un conflicto social de tal profundidad que no pueden achacársele causas externas.

El FMLN libra la guerra con recursos fundamentalmente nacionales y puede mantenerse por mucho tiempo porque cuenta con un gran apoyo popular. En la actualidad, aproximadamente el 40 por ciento de las bajas del ejército son resultado de la utilización de armas populares, fabricadas por el mismo pueblo con recursos sencillos. No deben olvidar los asesores que, incluso en Vietnam, donde los revolucionarios tenían mayor cantidad y posibilidades de usar armamento convencional, el 50 por ciento de las bajas de las tropas norteamericanas fueron causadas con armamento popular.

El movimiento revolucionario salvadoreño tiene raíces históricas nacionales. Su retaguardia está dentro del país y una de ellas a sólo 30 kilómetros de la capital. Eso no puede explicarse como expansionismo de ningún tipo, sino como expresión histórica de una lucha popular y revolucionaria, la cual comenzó hace más de 50 años, cuando no existía ni la revolución cubana ni la revolución nicaragüense y la Unión Soviética estaba más preocupada por sobrevivir como primer Estado socialista del mundo que por lo que pasaba en nuestro pequeño país. Sin embargo, en aquella ocasión también se culpó a la Unión Soviética de lo que pasaba en El Salvador.

Cuando se produjo el triunfo de la revolución nicaragüense, el desarrollo del proceso revolucionario en El Salvador estaba muy avanzado. El triunfo de la revolución nicaragüense, en tanto constituyó un cambio estratégico en la correlación de fuerzas en Centroamérica, ejerció indiscutiblemente una influencia positiva sobre el proceso revolucionario salvadoreño. Pero también la victoria de la Revolución Popular Sandinista provocó una mayor intervención norteamericana en la región, con lo cual la guerra revolucionaria en El Salvador adquirió características de mayor complejidad, convirtiéndose en un nuevo reto para los revolucionarios salvadoreños.

Los analistas del Pentágono, partiendo de falsas teorías como la del dominó y la de la exportación de las revoluciones, daban al FMLN pocas posibilidades de sobrevivir, dada la inexistencia de fronteras directas con Nicaragua que pudieran permitir un apoyo material suficiente para resistir la escalada intervencionista y la complejidad de la guerra. Partiendo de la tesis de que las revoluciones se exportan, cabe preguntarse, ¿por qué razón la guerra popular se acrecentó en El Salvador y no en Costa Rica ni en Honduras, donde resultaba más fácil por la existencia de fronteras directas con Nicaragua? Lejos de eso, en Costa Rica y Honduras se asentaron fuerzas mercenarias que sí son descaradamente abastecidas y mantenidas por Estados Unidos. A diferencia de los revolucionarios salvadoreños, "la contra" tiene las características de una fuerza invasora, extra nacional, sin apoyo ni retaguardia interna y no sobreviviría mayor tiempo de no recibir ayuda norteamericana, puesto que la tropa es mantenida a base de salario y corrupción y no por conciencia. La "contra," en ese sentido, no tiene la más mínima posibilidad de victoria. Es solamente un instrumento de presión de los norteamericanos, el cual está siendo derrotado.

Se arguye la armamentización de Nicaragua para justificar la intervención en Centroamérica y, por lo tanto, también en El Salvador. Pero, ¿tiene o no derecho Nicaragua a armarse cuando es constantemente amenazada por una intervención directa de Estados Unidos? Si Nicaragua no se hubiera armado y fortalecido en la proporción que lo ha hecho, con toda seguridad Estados Unidos ya habría desembarcado sus tropas en ese país.

Grenada, República Dominicana y las decenas de intervenciones militares del gobierno de Estados Unidos contra los pueblos de América a lo largo de toda la historia prueban que el derecho del pueblo nicaragüense a armarse es justo y legítimo. En tanto Estados Unidos no respete el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la revolución, los pueblos deberán armarse para defender los cambios sociales que necesitan. Lo que los analistas del Pentágono llaman "conflictos de baja intensidad" son, en realidad, guerra de agresión contra los pueblos que luchan por promover cambios sociales internos que no son del agrado de la política de saqueo e intercambio desigual que Estados Unidos intenta perpetuar. En ese sentido, no existe una guerra contra el supuesto expansionismo soviético, sino agresiones de una política imperialista contra los pueblos del tercer mundo. Estos conflictos van a extenderse y a multiplicarse si Estados Unidos persiste en su errada política de agredir a los pueblos.

Tampoco puede calificarse como parte del conflicto este-oeste el derecho que tienen los pueblos a buscar relaciones justas para su progreso social y económico. Más aún, cuando se plantean medidas como el bloqueo y un injusto y desigual intercambio económico. Además, en América, no sólo Nicaragua mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con los países socialistas. En síntesis, no son las revoluciones las que tratan de aislarse de Estados Unidos, sino que es Estados Unidos el que trata de aislar a las revoluciones. En ese sentido, no puede hablarse de conflicto este-oeste, ni en Nicaragua ni en El Salvador. Sólo queda entonces el argumento de la expansión de las ideas que no es sino anticomunismo rabioso y constituye una lucha irracional y antihistórica. Las ideas son y han sido universales y quienes han luchado contra su propagación han sucumbido.

Todas las corrientes políticas están internacio-

nalizadas: Internacional Socialista, Internacional Demócrata-Cristiana, Internacional Liberal. Hasta la extrema derecha fascista está internacionalizada. Justificar una intervención a partir de las ideas que tiene el bando revolucionario es irracional, absurdo y contrario a la lógica histórica de la evolución del pensamiento humano. Las revoluciones no se pueden exportar ni importar. Las revoluciones las hacen los pueblos. En nuestro país, entonces, no existe conflicto este-oeste, lo que existe es injusticia social, intervención imperialista y guerra popular revolucionaria por la liberación nacional.

La intervención, sin posibilidad de éxito

La guerra revolucionaria salvadoreña se contextualiza en el marco de un debilitamiento global de la política imperialista de Estados Unidos. La crisis originada por la derrota en Vietnam es un elemento clave que contribuyó a abrir espacios para que la lucha de los pueblos obligara a Estados Unidos a un cambio en los términos de sus relaciones con el tercer mundo.

La profundidad de la crisis económica latinoamericana y el empuje de la lucha popular han agotado el esquema de las dictaduras tradicionales y de las políticas sumisas. Estados Unidos se ve enfrentado a un continente que le alza la voz y que es ahora más anti-imperialista e independiente que en cualquier otro momento de su historia.

Es muy complicada y difícil la decisión de una intervención directa de las tropas norteamericanas en Centroamérica. Lo más seguro es que los norteamericanos harán todo lo posible por contener el avance revolucionario en Centroamérica, elevando cada vez más los niveles de ayuda material y sometiendo, mucho más, a su propia dirección a las fuerzas y gobiernos que le son adeptos. Estados Unidos hará todo lo que pueda por mantener sus planes sin usar a sus hombres porque ésto significaría trasladar el conflicto a su propio territorio. Sin embargo, no pueden descartarse las posibilidades de una intervención en Centroamérica. Veamos cuál sería la correlación de fuerzas que enfrentaría Estados Unidos en Centroamérica si intentara intervenir.

El nivel de consolidación y desarrollo de la Revolución Popular Sandinista exige de Estados Unidos un compromiso militar en gran escala, sin ninguna posibilidad de victoria a corto o largo plazo. Las fuerzas acumuladas por la Revolución Popular Sandinista le permiten resistir y vencer una intervención. La situación de Nicaragua no es, ni de lejos, la situación de Grenada. El poder militar y el nivel de conciencia de las masas nicaragüenses dificultará mucho las bases políticas en las cuales se sustentare la intervención y terminarán derrotándola. En el caso de El Salvador, una intervención estaría cuantitativamente relativizada por las dimensiones del conflicto y del país. Es decir, un porcentaje muy elevado de la tecnología militar, los medios y la fuerza norteamericana serían inservibles en la guerra que tendrían que librar en El Salvador. En general, si Estados Unidos se lanza a una guerra en Centroamérica, más que medios se verá obligado a emplear a sus hombres. Esto significará bajas y serios costos políticos internos.

Una guerra en Nicaragua y/o en El Salvador no será una guerra de una semana y 19 bajas, como lo fue la de Grenada. Una guerra en Centroamérica será una guerra de varios años, en la cual las tropas norteamericanas tendrán decenas de miles de muertos y heridos. Será una guerra que abarcará toda la región, ya que una intervención obligará a que los revolucionarios nos tracemos una estrategia regional; no habrá fronteras ni retaguardia segura para las tropas norteamericanas y sus aliados.

Una intervención en El Salvador podría producirse en el momento en que el ejército salvadoreño se aproxime al colapso, lo cual significaría que las fuerzas sociales alineadas con la revolución se habrían multiplicado y asimismo se habría ampliado la gama de fuerzas opuestas a la injerencia norteamericana en El Salvador. La intervención no haría otra cosa que reforzar y acrecentar esta situación, proveyendo al FMLN de las condiciones políticas favorables y de la fuerza social necesaria para poder resistir y vencer la intervención.

En síntesis, al analizar la correlación de fuerzas en Centroamérica para una intervención, no debemos medirla en términos de la superioridad númerica o de la cantidad de recursos materiales que Estados Unidos pueda comprometer, sino en cuanto a la capacidad de resistir y luchar que tengan los pueblos para debilitar la base de sustentación política y moral de la intervención y tomando en cuenta la situación interna de Estados Unidos y el contexto de la coyuntura internacional.

Es objetivo afirmar que los revolucionarios salvadoreños y nicaragüenses pueden resistir varios años en guerra. Pero, ¿cuántos muertos puede asimilar la estrategia norteamericana y cuánto tiempo puede mantenerse librando la guerra con sus hombres, sin que la situación se revierta dentro de Estados Unidos? Hay quienes asocian la intervención con la idea de una guerra larga, pero tomando en cuenta los efectos de la guerra de Vietnam, la situación internacional, la situación continental y la propia situación de Estados Unidos, puede preverse que los norteamericanos ya no están en capacidad de librar una guerra larga como la que tendrían que librar en Centroamérica. Esta se volvería injustificable ante el mundo y ante el propio pueblo norteamericano. Aquí conviene diferenciar los intereses que defiende Reagan de los que defiende el pueblo norteamericano.

Mientras la política de intervención de Estados Unidos en Centroamérica se dé a través de sus recursos económicos y materiales, el problema político

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

es relativamente menor, ya que las erogaciones de fondos no comprometen de manera directa los intereses del pueblo y de la clase trabajadora norteamericana. Pero en el momento en que esté en juego la vida de los jóvenes norteamericanos, la política del gobierno de Reagan entrará en choque directo con el pueblo de Estados Unidos que es quien tendría que poner los muertos en defensa de una política imperialista de la cual no participa.

La bandera del anti-comunismo y la supuesta expansión soviética es extremadamente pobre para justificar una guerra inmoral e injusta, la cual obligará a que mueran jóvenes norteamericanos y a cometer acciones genocidas. Una guerra así no tendría el apoyo del pueblo norteamericano, ni de incontables fuerzas políticas de la estructura de poder dentro de Estados Unidos. El propio Pentágono y el complejo militar industrial no verían con buenos ojos una guerra en El Salvador y Centroamérica, puesto que ésta no constituiría ningún negocio y distraería sus esfuerzos en la correlación estratégica en la cual están en juego muchos miles de millones de dólares.

Estados Unidos debe pensar seriamente en las implicaciones que tendrá el persistir en su política errada hacia Centroamérica. Sería mucho menos costoso buscar una solución negociada que respete el derecho de autodeterminación de los pueblos de Nicaragua y El Salvador, que lanzar una guerra de intervención, sufrir una derrota y tener que retirarse. La retirada de las tropas norteamericanas a largo plazo, sin obtener una victoria, será una verdadera catástrofe y traerá una profunda crisis a la política imperialista y a sus aliados de la cual seguramente ya no podrán salir.

La intervención directa de Estados Unidos en Nicaragua y El Salvador, además de provocar la regionalización de la guerra, será una agresión a toda América Latina. Ningún pueblo, gobierno, ni fuerza política que esté por la independencia de su país, aceptará la imposición de la política de Estados Unidos. Hacerlo sería aceptar el estar sometido a nuevas amenazas, chantajes y agresiones directas.

Tomando en cuenta el momento político latinoamericano actual, en el cual son irreversiblemente hegemónicas las fuerzas que están por la independencia y el respeto a la autodeterminación, las consecuencias serán aún mayores.

La agresión de Estados Unidos acelerará y profundizará los procesos de lucha social y nacional en todo el continente. No debe Estados Unidos olvidar que El Salvador se puede convertir en una escuela de lucha para todos los pueblos de América Latina. Está claro entonces que en su esfuerzo por someter a los pueblos de Nicaragua y El Salvador, Estados Unidos no sólo no podrá impedir esas revoluciones, sino que acelerará otras y consolidará el proceso de lucha por la independencia política y económica abierto en el continente. Cabe preguntarse entonces, ¿cuántos millones de dólares, cuánta ayuda militar podrá movilizar Estados Unidos para contener los estallidos de lucha en Centroamérica y en el continente? ¿Tendrá Estados Unidos la capacidad para controlar una crisis de estas dimensiones?

Es falsa la idea de quienes piensan que la suerte de una intervención en Centroamérica será diferente a la de Vietnam por haber sido esta última una guerra librada muy lejos de Estados Unidos y porque Vietnam, además, tenía fronteras directas para ser abastecida. Esta idea cae por su propio peso al analizar la enorme diferencia en fuerzas, medios y tecnología con que el pueblo vietnamita debió enfrentar esa guerra.

Los mismos norteamericanos, en su análisis sobre la teoría de lo que llaman "conflictos de baja intensidad" y de su experiencia en Vietnam, han establecido que el elemento central que definió la guerra en su contra fue el que nunca pudieron estructurar una política para disputar las masas al Frente de Liberación Nacional y que la situación dentro de Estados Unidos se les volvió insostenible para mantenerse en guerra.

Hay opciones más inteligentes y sensatas que le permitirían a Estados Unidos reajustar su política hacia el continente, si se decidiera por buscar adaptarse a los inevitables cambios sociales que su propia dominación ha acelerado en América. Estados Unidos tiene mejores opciones si sabe aprovechar su poderío tecnológico, su poder financiero y su influencia cultural, en el marco de una justa política de relaciones con los pueblos de América.

La solución política negociada: la mejor solución a la guerra

A lo largo de todo el análisis hemos probado objetivamente que el FMLN–FDR puede alcanzar la victoria. Cabe incluso señalar que el actual plan contrainsurgente ha sido puesto en crisis más rápidamente que el anterior y cuando aún no están desplegadas todas las líneas estratégicas del plan del FMLN. La intencionalidad de este enfoque no es asumir una posición inflexible, sino probar objetivamente que el curso histórico del proceso de la lucha social en el cual se inscribe la actual guerra, no puede ser alterado, porque en su base hay razones sociales estructurales.

El sistema de dominación oligárquico, expresado en un capitalismo dependiente cuyo fundamento es una obsoleta estructura agraria, es ya incapaz de hacer progresar nuestra sociedad. Lo único que hace es profundizar la miseria de las mayorías. La modernización artificial del sistema capitalista, no hará otra cosa que hacernos perder nuestra independencia y sentar las bases para otra guerra más cruenta y más dura que la actual.

El genocidio que acabó con 30 mil salvadoreños, cometido por Maximiliano Hernández Martínez

en 1932; el nuevo genocidio cometido por Duarte en los años 80, el cual ha costado la vida de más de 50 mil compatriotas y la existencia de una guerra de dimensiones que nadie pudo imaginarse en un país tan pequeño, son prueba irrefutable de que las transformaciones son inevitables y que la revolución es necesaria. Se impone, entonces, un cambio profundo en la estructura de poder económico, político y militar. La laboriosidad de las clases trabajadoras salvadoreñas, de la cual antes tanto se vanagloriaba la oligarquía porque podía explotarlas al límite, hoy se ha convertido en capacidad política, organización y conciencia de su papel histórico. Con ello, los trabajadores se han constituido en una poderosa fuerza social, preparada para ser el componente principal del poder de nuestra sociedad. Esto no puede ser evitado por nadie al ser la evolución natural de la sociedad.

El desarrollo atrofiado del capitalismo en nuestro país, hizo progresar nuestra sociedad, generando una clase trabajadora integrada por obreros y campesinos quienes serían la base del nuevo sistema social. La alianza FMLN—FDR es, en ese sentido, la síntesis histórica de la capacidad de lucha que nuestro pueblo ha acumulado para transformar la sociedad, cuando las condiciones así lo han planteado. Detrás de la capacidad del FMLN—FDR está una larga historia de luchas sociales y nacionales. No es por ello casual que sea en El Salvador donde se esté produciendo una guerra popular que ha obligado al nivel de intervención más alto que se conoce en América Latina.

El FMLN—FDR conjuga las capacidades históricas del pueblo en la lucha militar, en las tareas de organización de las masas, en la lucha política conspirativa y en la lucha diplomática. En síntesis cuenta con una estructura de cuadros capaces de librar y ganar batallas en todas las formas de lucha requeridas. De todo ésto resulta una fuerza firme en la defensa de los intereses populares y al mismo tiempo flexible porque tiene mucha confianza en sus fuerzas acumuladas y en la capacidad de debatir posiciones y probar la justeza de lo que propone.

La actual estructura de poder tiene desde hace ya mucho rato un régimen de vida artificial, basado en el apoyo norteamericano al cual se ve obligada a recurrir por la presión de una lucha social que no puede contener ni justificar achacándole causas externas. El planteamiento de que la guerra en El Salvador tiene causas externas, es un argumento poco serio y carece de toda objetividad. De igual manera, el argumento de la legitimidad electoral y constitucional del gobierno constituye ya un discurso gastado por los hechos. Si la guerra no tiene causas externas y las elecciones no pudieron detener el conflicto que sigue siendo el centro de la problemática de la sociedad, queda claro entonces, que las causas de la guerra residen en una profunda lucha social interna, y por lo tanto, las elecciones no fueron otra cosa que un componente político del plan contrainsurgente, el cual ya probó su inutilidad.

Las elecciones, en el actual contexto de guerra y partiendo de la estructura de poder político, militar y económico existente en este momento en nuestra sociedad, no pueden ser una alternativa de solución política. Los que están enfrentados son dos proyectos de naturaleza totalmente diferentes. Las fuerzas acumuladas por el movimiento revolucionario tienen cuestionado y en jaque a los pilares fundamentales del sistema. Es objetivamente imposible, entonces, una solución política no fundamentada en una recomposición de fuerzas.

El sistema electoral actual no cuestiona el poder real. En él sólo se debate la administración del poder formal. Incluso, este poder formal es previamente definido por Estados Unidos. Un resultado electoral que cuestione el sistema en profundidad haría saltar de inmediato el componente principal del poder real, constituido por el ejército. En la actual lucha social no está planteada la demanda de apertura o un reformismo dosificado por los norteamericanos y pactado con la oligarquía, sino que se está cuestionando el sistema en sí con una exigencia de cambios profundos. En ese sentido, es imposible que el juego político electoral pueda servir para otra cosa al plan contrainsurgente que no sea para agudizar sus propias contradicciones. En nuestro país se podrá hablar de elecciones si se recompone la estructura del poder militar, económico y político.

El gobierno de Duarte está hipotecando a la nación y encamina a nuestra sociedad a mayores grados de dependencia que sólo interesan a aquellos que están parasitando de la corrupción. La dependencia debilita y anula la influencia de los otros sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Los norteamericanos ponen a nuestra sociedad cada vez más en función de la guerra sin importarles que ésto signifique la ruina económica de importantes sectores de las capas medias, profesionales, terratenientes, la empresa privada y toda la clase trabajadora. La guerra en nuestro país es un conflicto de orígenes sociales, pero su prolongación y profundización no se deben a la voluntad de los salvadoreños, sino a la intervención norteamericana que bloquea las posibilidades a una solución nacional.

Las fuerzas políticas, económicas y sociales salvadoreñas convencidas de que nuestra sociedad necesita cambios estructurales para alcanzar la paz, constituyen la mayoría.

La solución política, en primer lugar, tiene que tener como fundamento el diálogo entre los salvadoreños y, en segundo lugar, debe ser realista. No es realista pensar que el diálogo es para someter al contrario. Este es el momento para que los salvadoreños nos propongamos negociar una paz justa porque sería un error, además de ser irreal, pretender usar la negociación para buscar la rendición de uno u otro bando. La posición del FMLN FDR por una solución política es firme y realista, porque se basa en una

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG

apreciación correcta de la correlación de fuerzas. El gobierno por su parte, a pesar de haber agotado sus capacidades propias para mantenerse en guerra desde hace rato, persiste en la solución militar, aumentando la dependencia y exigiendo más sacrificio económico al pueblo. Si el gobierno no puede mantenerse en pie sin depender de los norteamericanos y sin exigir del pueblo sacrificios económicos que éste no está dispuesto a hacer porque no está de acuerdo con la guerra impuesta por Estados Unidos, ha llegado el momento de negociar la paz o a la larga perderá la guerra.

La solución política-negociada no puede concebirse para evitar los cambios sociales, pero sí para lograrlos mediante consensos nacionales. Esto significa un máximo aprovechamiento de las capacidades de nuestra sociedad en la búsqueda de un progreso más rápido. Es decir, una solución política no sólo reduce los costos sociales de una guerra, sino que permite abrir un juego político que, en el marco del dinamismo de los cambios, abrirá expectativas y logrará recomposiciones de fuerzas las cuales permitirán que todos los sectores de nuestra sociedad asuman papeles importantes.

La empresa privada tiene la posibilidad de jugar importantes papeles en la transformación y reactivación económica de la sociedad. El problema del poder militar puede debatirse y se puede buscar fórmulas que permitan una justa solución, toda vez que logremos dar a ese proceso de solución política el carácter de una solución nacional en la cual primero estarán los intereses de la nación y luego la lucha para buscar una formulación de la paz, la democracia y la justicia. Detrás de estas ideas no hay una concepción idealista de transformar la sociedad por una vía pacífica, sino el convencimiento de que la cuota social que ya hemos pagado y las dimensiones que la guerra ha cobrado pueden ser suficientes para transformar nuestra sociedad. Luchar por el consenso de que la solución política negociada es la mejor solución a la guerra ayudará a evitar los costos sociales de una intervención. Con ésto le estaremos ayudando al propio pueblo norteamericano a ahorrarse vidas y a la sociedad norteamericana a buscar mejores caminos en la necesidad que tienen de cambiar los términos de sus relaciones con los países del tercer mundo. Este esquema exige el abandono del trogloditismo político, de las posiciones reaccionarias y del anti-comunismo rabioso. Los que mantienen estas posiciones deben abrir los ojos y deben darse cuenta que hay un mundo en evolución, que sus posiciones son obsoletas, que el avance de las ideas no ha podido ser contenido y que la influencia del marxismo como disciplina social que influye en todos los terrenos del pensamiento humano es cada día mayor. Existen decenas de estados con diferentes y variadas posiciones ideológicas conformando el movimiento de países no alineados y hay muchas naciones más que en las últimas décadas han coexistido pacíficamente y han fortalecido sus relaciones en todos los campos, a pesar de tener estados con sociedades de naturaleza diferente. El desarrollo de las sociedades socialistas y la existencia de movimientos y partidos revolucionarios, los cuales cada día son más y más fuertes en todo el mundo, constituyen una realidad que obliga a pensar si son los revolucionarios los que deben cambiar sus ideas, o si son los otros quienes deben atenuar su anticomunismo y entender que la sociedad ha avanzado, que es imposible detener la propagación de las ideas, ya que si éstas son justas y prueban ser capaces de llevar a la humanidad a mejores condiciones y al progreso social, terminarán imponiéndose, como ha sucedido siempre a lo largo de toda la historia.

Morazán, abril de 1986.